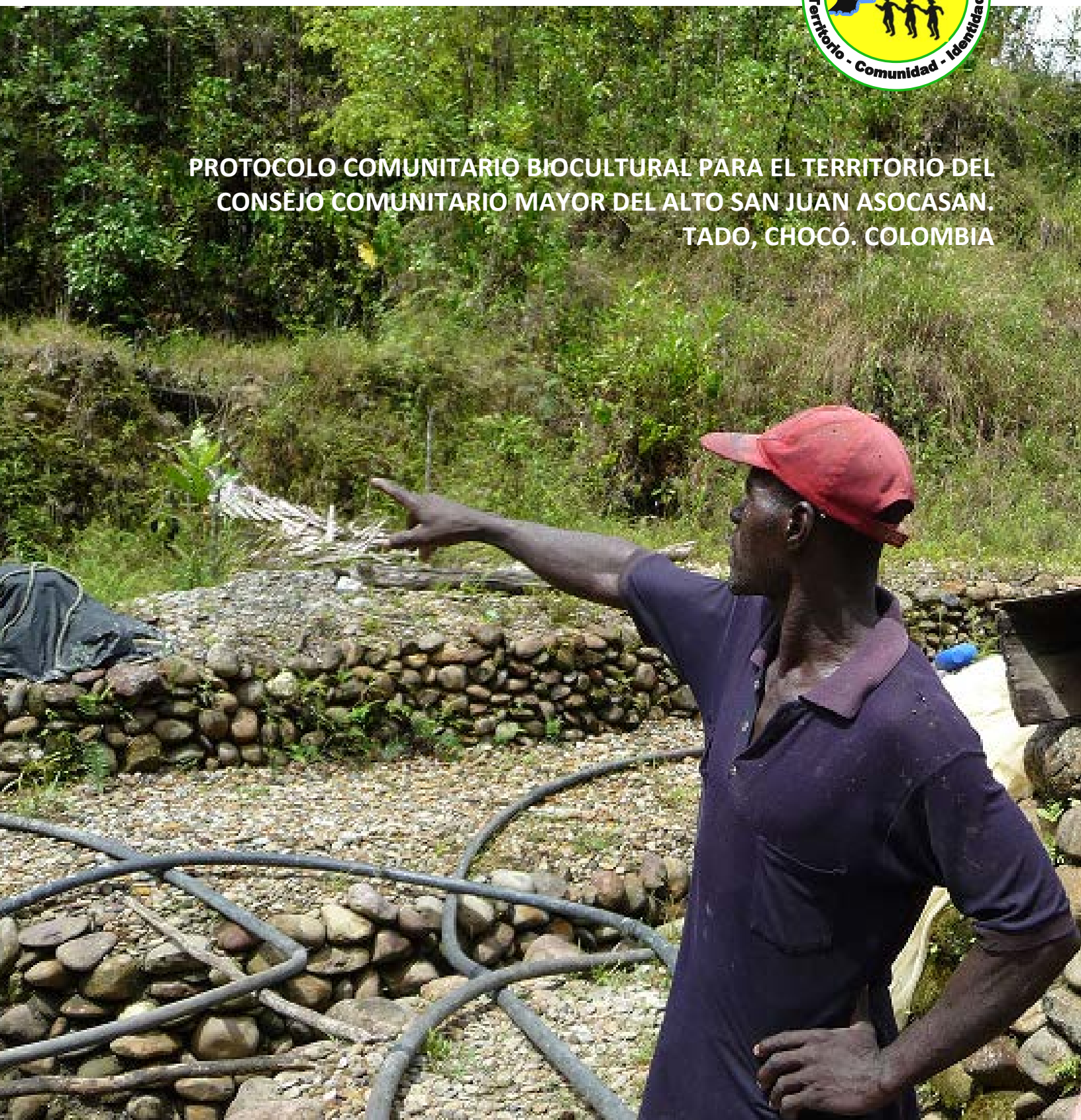




**PROTOCOLO COMUNITARIO BIOCULTURAL PARA EL TERRITORIO DEL
CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DEL ALTO SAN JUAN ASOCASAN.
TADO, CHOCÓ. COLOMBIA**





**PROTOCOLO COMUNITARIO BIOCULTURAL PARA EL TERRITORIO
DEL CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DEL ALTO SAN JUAN
ASOCASAN. TADO, CHOCÓ. COLOMBIA**



Instituto de Investigaciones
Ambientales del Pacífico



NATURAL JUSTICE

PROTOCOLO COMUNITARIO BIOCULTURAL PARA EL TERRITORIO DEL CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DEL ALTO SAN JUAN ASOCASAN. TADO, CHOCÓ. COLOMBIA

Marzo 2012

Producido por: Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan

Equipo técnico: Alex Pires Carneiro y Hugo Hernández Flores (PNUMA); Tatiana López Piedrahita (IIAP); Johanna von Braun y Gino Cocchiari (Natural Justice); y Marcela Jimenez Larrarte (consultora independiente)

Revisión por pares: Manuel Ruíz y María Eugenia Recio

Crédito de Imagen de portada: Tatiana López Piedrahita

Está autorizada la reproducción total o parcial y de cualquier otra forma de esta publicación para fines educativos o para usos sin fines de lucro, sin necesidad de ningún otro permiso especial del titular de los derechos, bajo la condición de que se identifique la fuente de la que proviene. Dicha identificación deberá realizarse del siguiente modo:

“ASOCOSAN, PNUMA, IIAP y NJ. 2012. «Protocolo Comunitario Biocultural para El Territorio del Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan». Disponible en www.pnuma.org/publicaciones.php”

El PNUMA agradecerá que se le remita un ejemplar de cualquier texto cuya fuente haya sido la presente publicación. No está permitido el uso de esta publicación para su venta o para usos comerciales.



Este Protocolo Comunitario Biocultural fue elaborado por el Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan (ASOCASAN), con el relevante apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP) y la ONG internacional Natural Justice (NJ).

El PNUMA promueve prácticas globales ambientalmente amigables, además de promoverlas también en sus propias actividades. Nuestra política de distribución busca reducir la huella de carbono del

PNUMA

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE

Descargo de responsabilidad

Las denominaciones empleadas y la presentación del material en esta publicación no implican en absoluto la expresión de ninguna opinión por parte del PNUMA con respecto a la situación legal de ningún país, territorio, ciudad, área, o sus autoridades, ni en lo concerniente a sus fronteras y límites.

Asimismo, el contenido y las opiniones expresadas en esta publicación son las de los autores y no reflejan necesariamente las opiniones del Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas.

Aunque se han hecho esfuerzos para verificar que el contenido de esta publicación sea factual y tenga referencias apropiadas, el PNUMA no acepta responsabilidad por su precisión o su entereza. Tampoco se hará responsable por los daños y perjuicios que puedan resultar por basarse en los contenidos de esta publicación.

La mención de una empresa comercial o un producto en esta publicación no implica respaldo alguno por parte del PNUMA.

**PROTOCOLO COMUNITARIO BIOCULTURAL PARA EL TERRITORIO DEL CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DEL
ALTO SAN JUAN ASOCASAN. TADO, CHOCÓ. COLOMBIA.**

CONTENIDO.

TERRITORIO Y COLECTIVIDAD.....	7
Cultura y comunidad.....	9
Cómo se define la comunidad del Alto San Juan.....	9
Reseña histórica de ASOCASAN.....	10
Estructura de gobernabilidad	10
Afirmación de intenciones	10
 NUESTRA RELACIÓN CON LOS RECURSOS NATURALES	11
Nuestras prácticas y sistemas de producción	12
 NUESTRA RELACION CON EL RECURSO MINERO.....	12
La minería tradicional.....	12
Actividades asociadas a la minería tradicional	14
 NUESTRO APROVECHAMIENTO DEL BOSQUE	15
El aprovechamiento maderable y no maderable del bosque	15
 MEDICINA TRADICIONAL	16
Prácticas de la medicina tradicional.....	16
 DESAFIOS EN EL TERRITORIO.....	17
Minería mecanizada ilícita.....	18
Extracción Forestal Ilegal	19
Uso ilegítimo de saberes de la medicina tradicional.	20
Incumplimiento de los mecanismos de participación	20
 NUESTRAS EXPECTATIVAS PARA EL FUTURO.....	21
Consentimiento libre, Previo e informado	23
Relación con las autoridades.....	23
Compromisos comunitarios	25
 ANEXOS	26

PROTOCOLO COMUNITARIO BIOCULTURAL PARA EL TERRITORIO DEL CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DEL ALTO SAN JUAN ASOCASAN. TADO, CHOCÓ. COLOMBIA**PRESENTACION**

La diversidad biológica (o biodiversidad), entendida como el conjunto de naturaleza y cultura, requiere de un uso y manejo equilibrado de los recursos naturales y de una visión integral del concepto de territorio. Esto implica reconocer las formas comunitarias de ordenamiento y uso de los recursos naturales, y las prácticas que contribuyen a mantener el patrimonio natural y cultural. Reconocer y respetar estos aspectos implica incluir los procesos endógenos en las comunidades que han generado estrechos vínculos entre la naturaleza y su propio desarrollo, y que han logrado una gestión eficiente de la biodiversidad en sus territorios. Por otro lado, reconocer los procesos de ordenamiento y manejo de estas comunidades es el punto de partida para la construcción de proyectos, acciones de desarrollo, medidas normativas y legislativas, que afectan e incidan sobre los territorios colectivos de las comunidades étnicas. Esto significa un nuevo enfoque, sustentado en la interlocución entre la estructura comunitaria de gobierno y los actores institucionales públicos y privados, para concertar un proceso de desarrollo fundamentado en el respeto y aceptación de las pretensiones y derechos de las comunidades afrodescendientes de la cuenca Alta del Río San Juan.

El presente Protocolo fue elaborado por representantes de la comunidad del Alto San Juan y miembros de ASOCASAN¹ (Asociación Campesina del Alto San Juan)². Este proceso se desarrolló entre los meses de septiembre y diciembre de 2010, en los cuales se realizaron talleres con representantes de la comunidad y miembros del Consejo de ASOCASAN. El grupo convocado reunió una variedad de hombres y mujeres de distintas edades y ocupaciones con diversos niveles de conocimiento de las actividades tradicionales; esto permitió definir, desde la comunidad, cuál es el territorio, qué relación tiene con los recursos naturales y cuáles son las principales problemáticas de la comunidad del Alto San Juan.

Lo anterior permitió identificar aspectos que contribuyen a fortalecer las pretensiones comunitarias bajo el concepto del territorio como “espacio de vida”; en el que expresan preocupaciones con respecto a sus derechos sobre la propiedad colectiva, y propone procedimientos sustentados en los marcos del derecho nacional e internacional que permitan orientar procesos de interlocución para la toma de decisiones. Éstos, deberán ser reconocidos y cumplidos por propios y foráneos en el territorio colectivo del Alto San Juan. Este documento considera los compromisos con la agenda del “Convenio sobre Diversidad Biológica - CDB”, particularmente con el “Protocolo de Nagoya³”; y proporciona lineamientos que pueden ser ajustados para incluir otros temas o desarrollar nuevos protocolos bioculturales en la medida que se fortalezca el proceso comunitario de gestión integral del territorio.

¹ Proceso apoyado de manera conjunta por el Instituto de investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP), el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la ONG internacional Natural Justice (NJ)

² Enlace de Contacto ASOCASAN asocasan90@yahoo.com, aristarco.mosquera@yahoo.es

³ “Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de su utilización” en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica, aprobado en Nagoya COP10 – 2010

INTRODUCCION.

El concepto “biocultural” es la forma de reconocer, de manera integral, los lazos que existen entre la comunidad y los recursos naturales del territorio: pretende un tratamiento conjunto sobre los recursos biológicos y sus manifestaciones desde lo micro genes hasta lo macro paisajes). Esto incluye, además, las prácticas ancestrales basadas en el conocimiento tradicional que contribuyen con el manejo sostenible del territorio.

En las dos últimas décadas, la comunidad del Alto San Juan ha ganado una serie de derechos territoriales sustantivos y de procedimiento a través del derecho nacional e internacional. No obstante, existen una serie de preocupaciones vinculadas al uso de los recursos biológicos en sus territorios ancestrales sin consulta previa, a la baja protección del conocimiento tradicional en relación con las plantas medicinales, a la falta de reconocimiento de las prácticas de minería tradicional, al uso insostenible de los bosques, y, a la permanente amenaza de la pérdida de conocimientos y prácticas tradicionales como consecuencia de un crecimiento económico que no contempla prácticas de desarrollo endógeno.

En consecuencia con lo anterior, este Protocolo Comunitario Biocultural se plantea como un instrumento de gestión que guarda estrecha relación entre la comunidad y su territorio, y que propone abrir espacios de interlocución para garantizar los derechos comunitarios y colectivos sobre el territorio. El documento se apoya en los principios culturales que contribuyen con la permanencia de la biodiversidad a través de las generaciones y con sus pretensiones de desarrollo propio.

Para las comunidades del territorio colectivo del Alto San Juan, es una preocupación constante mantener una buena oferta de bienes y servicios ambientales del territorio frente a los actuales intereses económicos de la nación, específicamente la explotación del recurso minero a cielo abierto.

“Nuestra pretensión es que se reconozca que existen arreglos propios de ordenamiento y uso de los recursos naturales desde los cuales deben partir los procesos de concertación con terceros frente a proyectos de desarrollo, para así disminuir la asimetría de poder, promover un enfoque participativo y asegurar la distribución equitativa de los beneficios que se generen”.

– Aristarco Mosquera Representante Legal Consejo Comunitario Mayor Alto San Juan, ASOCASAN

TERRITORIO Y COLECTIVIDAD.

Para la comunidad, el “territorio” es un concepto equivalente al de “ambiente”, ya que se refiere al área geográfica asociada al río San Juan, sus componentes culturales, sus relaciones con el ecosistema, sus formas de ocupación y su relación entre lo vivo y lo no vivo.

El territorio es nuestro espacio fundamental de desarrollo propio (Anexo 5 literal 4.2) y sustenta nuestra calidad de vida en el buen estado de los recursos naturales y la capacidad comunitaria de gobernabilidad (Wilson Murillo).

El derecho a la propiedad colectiva del territorio ancestral⁴ fue reconocido por el Estado a la comunidad del Alto San Juan mediante resolución INCORA 27-27 de diciembre 27 de 2001, la legislación nacional reconoce éste como un derecho fundamental que no puede ser restringido por gobernantes, no puede transmitirse su dominio a particulares, pertenece a la comunidad y así lo será por generaciones⁵

“Nuestro territorio es colectivo, es la base del modelo de desarrollo local. Respeta espacios de vivienda y áreas familiares de producción. La propiedad se da por la ocupación ancestral heredada y el reconocimiento comunitario. El territorio colectivo es una estrategia de conservación de los recursos y la cultura en donde como comunidad afrodescendiente promovemos prácticas de producción comunitaria, como la minería artesanal, el colino y la zotea, que permiten mantener una alta diversidad en nuestro territorio”

– Wilson Murillo, ex Presidente Junta directiva ASOCASAN



Imagen tomada por Tatiana López

Los suelos y los bosques incluidos en el territorio mantienen una alta diversidad biológica, en gran medida, debido a las prácticas de manejo tradicionales, las cuales generaron un mosaico productivo y natural que refleja los usos de las áreas de acuerdo con los conocimientos ancestrales y los arreglos con los recursos naturales.

El ordenamiento del territorio (Anexo 5 literal 7) refleja nuestra relación con los recursos naturales. Es el resultado del conocimiento local que ordena la ocupación según el uso de los recursos, considerando los sistemas productivos tradicionales, su estructura y las condiciones naturales de las áreas y, por lo tanto, es determinante para la participación efectiva, incluir nuestros procesos de ordenamiento y prácticas tradicionales de uso y conservación, en los procesos municipales de planificación de desarrollo territorial⁶.

⁴ El Convenio 169 de la OIT señala que *“Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”*.

⁵ En relación con la ley 70 de 1993 Del reconocimiento del derecho colectivo artículo 7 la parte de la tierra de la comunidad destinada a uso colectivo es inalienable, imprescriptible e inembargable.

⁶ En cuanto al Ordenamiento del Territorio en Colombia la ley 388 de 1997, observa que se debe fomentar *“la concertación entre los intereses sociales, económicos”, lo que se logra mediante la participación democrática de todas sus pobladores como de las organizaciones que existen en esos lugares, adicionalmente deberá atender condiciones propias de diversidad étnica y cultural “reconociendo el pluralismo y el respeto a la diferencia”, tratando de lograr una óptima utilización de recursos naturales y humanos para mejorar calidad de vida y bienestar general de la población de la región.*

La propiedad colectiva enmarca la protección y conservación de la integridad de los componentes naturales y la cultura.

Cultura y comunidad

La llegada de las comunidades afrocolombianas a la región del Alto San Juan data de 1530. Junto con la creación del real de minas de Monte Carmelo, la minería determinó las condiciones culturales de la zona, puesto que se buscaban los ricos yacimientos de oro y platino que ahí existían, lo cual generó un rápido desarrollo de la comarca a través de varias rutas de comercio con Carmelo, Andágueda, San Pablo y San Juan.

Aunque la economía minera históricamente se basó en la explotación de las comunidades afrocolombianas del Alto San Juan, permitió el desarrollo de la cultura mediante su adaptación a las condiciones ambientales, las que se sustentaron en principios de relación interétnica, en formas de ocupación, en formas de trabajo y, en conocimientos sobre los recursos naturales del territorio, que fueron transmitidos durante generaciones.

La construcción en 1910 del camino nacional hacia el Chocó, generó características especiales que pusieron a la comunidad en el camino de dos concepciones del mundo y del desarrollo: el llamado “eje cafetero” que abastecía de oro a las principales familias criollas y que respondía enteramente a intereses económicos, y; “la cuenca del pacífico”, con su gran mosaico natural, que representó una oportunidad de libertad para los afrodescendientes. Esto último generó una relación estrecha con los recursos naturales y permitió una adaptación mutua entre la cultura y el paisaje. La resistencia generacional, a través del movimiento social de comunidades negras, y la adaptación al territorio, generó un vínculo indisoluble que se conserva hasta hoy⁷

“Hemos mantenido el bienestar de la comunidad, modelando el territorio de acuerdo con el uso racional inmerso en nuestras prácticas culturales, las cuales contribuyen a la conservación de la integridad de los recursos naturales en el territorio.”
(Representante Junta Directiva ASOCASAN)

Cómo se define la comunidad del Alto San Juan⁸

La comunidad del Alto San Juan nos autodeterminamos como un grupo de familias, vecinos y amigos afrocolombianos que comparten tradiciones (gastronómicas, medicinales, musicales), creencias (espirituales, religiosas) y costumbres (de convivencia, manejo de los recursos y formas de trabajo); las cuales se manifiestan en nuestra forma de vida tradicional y en nuestras prácticas productivas mineras, agrícolas, forestales, de caza y de elaboración de herramientas e instrumentos. Contamos con una historia común de origen minero, donde se han tejido vínculos familiares que produjeron prácticas asociativas de trabajo. De manera voluntaria somos habitantes permanentes” de un territorio colectivo ancestral de la cuenca alta del río San Juan, que se conforma por 30 comunidades

⁷ Mosquera C. H. (2003) Conozca ASOCASAN. Documento Inédito. Playa de Oro, Chocó Colombia

⁸ Definición coherente el término “Comunidad Negra artículo”. Artículo 2 de la Ley 70 1993.

organizadas en consejos comunitarios locales y agrupadas por un Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan ASOCASAN. Esta forma de gobierno comunitario del territorio y de estilo de vida ocupa un área de 54.571 hectáreas y 4.625m².

Reseña histórica de ASOCASAN

ASOCASAN es una organización étnico-territorial de derecho privado, sin ánimo de lucro, que funciona actualmente de acuerdo a la Constitución Nacional, la Ley 70 de 1993, sus decretos reglamentarios y demás disposiciones pertinentes relacionadas con el proceso de comunidades afrodescendientes en Colombia. Como organización étnica de base, se caracteriza por su interés por articular, con las instituciones estatales, entidades y organizaciones, actividades tendientes al fortalecimiento del proceso organizativo y de las relaciones interinstitucionales para el desarrollo integral del territorio

De igual manera, pretende construir con el Estado y las autoridades competentes, políticas de desarrollo que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los moradores de la región.

Estructura de gobernabilidad

De acuerdo con la ley 70 de 1993, la comunidad del Alto San Juan constituyó consejos comunitarios, los cuales son reconocidos (con su personalidad jurídica) como la máxima autoridad al interior de las tierras colectivas de comunidades negras, de acuerdo con los mandatos legales y reglamentarios, y aquellos que le asigne el sistema de derecho propio⁹. El Consejo Mayor esta conformado por una junta directiva integrada por cinco coordinaciones y un representante legal, elegidos por la comunidad y los consejos locales en asamblea general por un periodo de tres años. Los aspectos determinantes de funcionamiento y principios fundamentales, se establecen en el *reglamento del régimen interno del Consejo Mayor del Alto San Juan ASOCASAN y su territorio colectivo*. Los consejos locales son órganos territoriales comunitarios de características similares al Consejo Mayor, y contribuyen con la estrategia general de gobernabilidad del territorio.

La estructura organizativa (Anexo2) es la instancia de articulación interna e interlocución con actores externos al territorio (autoridades, instituciones, empresas públicas y privadas) y es el espacio en el cual se establecen las condiciones para desarrollar acciones de intervención en el territorio.

Afirmación de intenciones

La historia de la conservación de la biodiversidad y uso sostenible en el territorio colectivo es más antigua que las propuestas de desarrollo económico implementadas por el gobierno central y actores foráneos; no obstante, en repetidas ocasiones, se desconocen nuestras prácticas tradicionales (predominantes en las comunidades) y se tiende a vulnerar el derecho por definir nuestra propia opción de desarrollo¹⁰ y/o de administración de los recursos naturales del territorio.

⁹ De acuerdo con el artículo 3 del Decreto 1745 de 1995.

¹⁰ El artículo 7 del Convenio 169 de la OIT establece que, *“Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural”*.

Este documento es un medio para afirmar nuestras intenciones, que se fundamentan en el derecho de propiedad, las leyes consuetudinarias y en nuestra propia concepción del “desarrollo”. Asimismo, reconocemos las diferencias con otros actores – externos a la dinámica comunitaria–, en respeto a la dignidad del ser humano y a su pluralismo. Implica partir desde un enfoque basado en derechos, entre los que destaca el derecho a la libre determinación; al reconocimiento de la relación entre la comunidad y la biodiversidad, y; a los derechos territoriales y culturales reconocidos nacional e internacionalmente.

NUESTRA RELACIÓN CON LOS RECURSOS NATURALES

La relación con la naturaleza responde a un proceso histórico cultural de conocimientos asociados a los recursos del territorio. Nuestras prácticas ancestrales, contribuyen al mantenimiento de los recursos naturales y permiten el desarrollo de la comunidad¹¹. El sentido tradicional de ocupación (espacial) y uso de la tierra se establece de manera vertical sobre las cuencas, es decir, desde la playa del río (bajos inundables) hasta el filo de la montaña, en concordancia con el patrón que tradicionalmente se ha utilizado para el asentamiento humano. El sistema tradicional de producción comunitaria se refiere a un *sistema multi-opcional*, basado en la combinación de las labores agrícolas, pesqueras, mineras, de aprovechamiento forestal, cría de animales, de caza y labores artesanales. Estas prácticas de uso del territorio se establecen de acuerdo con el conocimiento tradicional conforme a la oferta natural y a las condiciones del paisaje.



Imagen tomada por Tatiana López

¹¹ Para la Corte Interamericana, los derechos sobre los recursos son una consecuencia necesaria del derecho a la propiedad territorial el fundamento está en que *“los integrantes de los pueblos (...) tienen el derecho de ser titulares de los recursos naturales que han usado tradicionalmente dentro de su territorio por las mismas razones por las cuales tienen el derecho de ser titulares de la tierra que han usado y ocupado tradicionalmente durante siglos”*. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. OEA/SER.L/V/II.Doc 56/09, 30 de diciembre de 2009, párrafos 181 y 182

Nuestras prácticas y sistemas de producción

Las prácticas de uso tradicional son aquellas que se transmiten por generaciones, representan zonificaciones, formas de uso propias y mantienen coherencia con los principios comunitarios y aspectos ecológicos de los recursos naturales del territorio mantenidos por generaciones.

Las actividades productivas que se realizan sobre la cuenca hidrográfica se dividen según el conocimiento tradicional y las condiciones que presenta el paisaje: en la parte alta predomina la extracción forestal y la caza (bosques comunitarios¹²); en la parte media, se realizan actividades agrícolas (conocidas como *colino*), de minería y de corte de madera para uso doméstico (unidades familiares), mientras que; en la parte baja, se desarrolla la pesca y otras actividades productivas.

La familia es la base de los sistemas productivos existe una división de trabajo adecuado para las mujeres, los menores y los varones, y considera principios de intercambios de trabajo entre los diferentes troncos familiares de la comunidad.

NUESTRA RELACION CON EL RECURSO MINERO

La minería de oro y platino es una práctica ancestral tradicional de extracción de gran importancia para la comunidad y de la que depende hasta un 80% de la población. Bajo un modelo ambientalmente sostenible, esta actividad contribuye con la economía familiar y permite mantener formas asociativas de trabajo comunitario.

La minería tradicional.

La minería tradicional es reconocida en el artículo 2 de la Ley 70 de 1993 como una práctica tradicional, por tanto sus mecanismos de manejo están asociados a nuestra identidad cultural.

Actualmente es una práctica interiorizada en el colectivo de la región, rica en técnicas y conocimientos del arte minero y el medio natural. Se desarrolla sin el uso de elementos contaminantes y contempla acciones de restauración de las áreas intervenidas con el uso de una amplia variedad de plantas alimenticias que contribuyen a la seguridad alimentaria.

Esta práctica se certifica actualmente en la región por el programa “Oro verde” a través de un sistema voluntario que considera 10 criterios de sostenibilidad (Anexo 4). Esta iniciativa apoya, fomenta y promueve la minería artesanal sostenible en el territorio y logró que en el 2010 se estableciera un estándar de comercio justo y minería para mineros artesanales.



Minería Tradicional

Imagen tomada por Tatiana López

¹² Bosques Comunitarios. Son aquellas áreas de uso comunitario ubicadas al interior del título colectivo y son de uso y aprovechamiento colectivo.



Imagen tomada por Johanna von Braun

La minería tradicional se desarrolla en áreas de bosque secundario, de donde se extrae el recurso superficial (aproximadamente a 15 metros de profundidad de acuerdo con el horizonte del suelo) sin afectar el cauce natural del río o de las actividades cotidianas de los pobladores de la cuenca.

“Utilizamos componentes naturales para cortar el oro (proceso de separación del oro de la jagua), entre éstos, el Balso: una especie forestal no contaminante ni toxica para la vida acuática”

– Luis Fermín, minero artesanal.

El Balso reemplaza el uso de mercurio y cianuro. Este conocimiento que ha pasado por generaciones involucra conocimientos asociados al mantenimiento y uso de ésta especie.

El material removido en el proceso de extracción del oro, se deposita en el cauce del río, formando terrazas de piedras sobre las cuales, junto con desechos orgánicos, se promueve la regeneración vegetal, permitiendo en el mediano plazo el uso del suelo para actividades productivas complementarias. Este sistema minimiza la fragmentación de hábitats y los procesos de degradación de las áreas destinadas a minería, ya que la explotación de una mina artesanal puede desarrollarse por más de quince años. Actualmente a este sistema se están incorporando elementos tecnológicos aumentando la eficiencia del trabajo bajo principios comunitarios de sostenibilidad.



Imagen tomada por Johanna von Braun

Terrazas de material removido para extracción de oro, previo al proceso de regeneración vegetal.

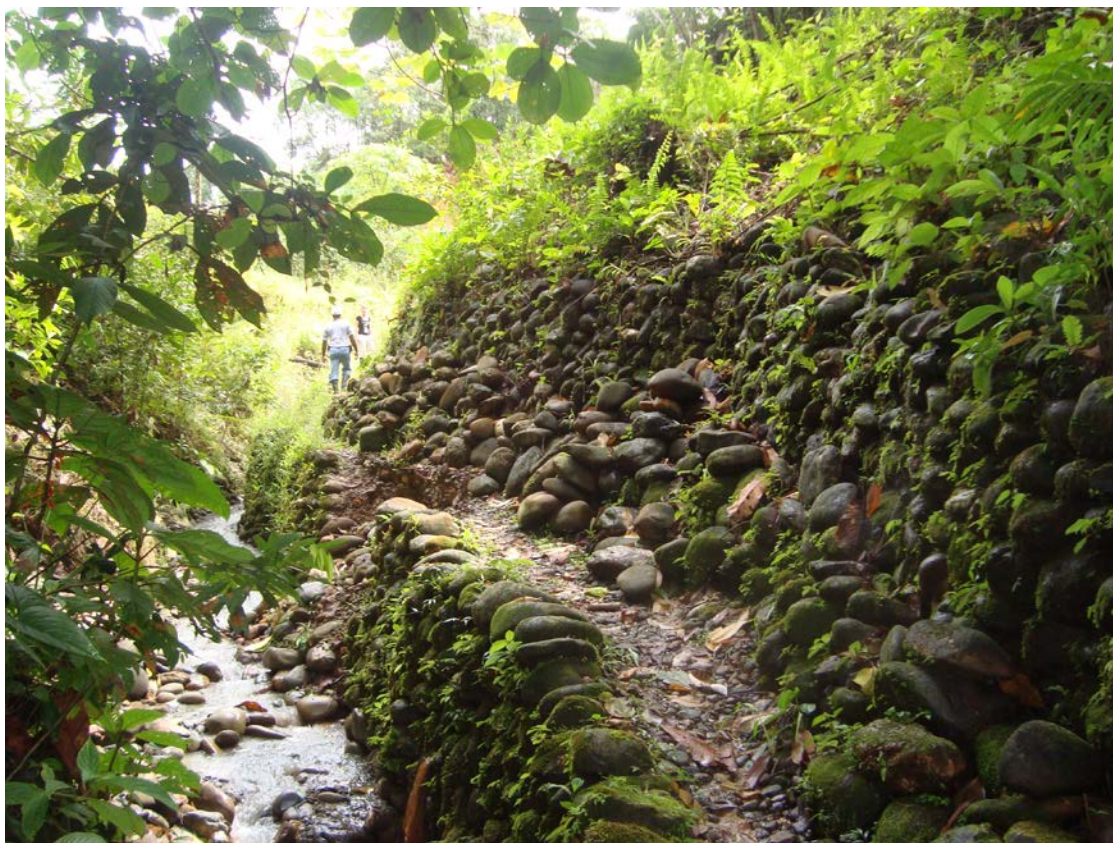


Imagen tomada por Johanna von Braun

Actividades asociadas a la minería tradicional

La minería, como práctica tradicional de producción¹³, se asocia a un proceso de promoción agrícola que contribuye a la recuperación del suelo y fomenta prácticas de intercambio entre familias. Esta actividad también facilita el flujo de genes entre especies locales asociadas a cultivos nativos para autoconsumo, debido al frecuente tránsito entre las rutas que se dirigen hacia las minas y hacia las áreas de recuperación.

Este modelo permite mantener una producción continua a largo plazo (plátano en todas sus variedades, chontaduro, maíz, yuca, achín, caña, borojó, anón jengibre y otros) y garantiza un medio de subsistencia familiar.

La granja social y productiva de ASOCASAN cuenta con semilleros de especies nativas para promover conocimientos y prácticas comunitarias de uso sostenible de la biodiversidad.

“El manejo de la tierra con técnicas culturales de producción nos permite rotar actividades y generar ingresos durante años... sabemos que el territorio es nuestro medio de ingresos y esperamos lo mismo para nuestros hijos”

- Belarmina minera artesanal.

¹³ Reconocida por el artículo 2 numeral 7, de la Ley 70 de 1993.

NUESTRO APROVECHAMIENTO DEL BOSQUE

Las áreas de bosque denso son reconocidas como áreas de conservación comunitarias en las cuales se realiza aprovechamiento con fines domésticos, en el Alto San Juan es común que las personas aprovechen especies maderables para construcción de viviendas, labranzas de canoas, palancas, canaletes, bateas, betadoras y elaboración de diferentes utensilios de uso doméstico (usos permitidos por ministerio, Ley 70 de 1993 artículo 19) bajo criterios asociados a prácticas tradicionales que consideran herramientas y formas de corte que permiten la regeneración del bosque (Anexo 4).



La rentabilidad de la actividad forestal depende de las condiciones del mercado externo. La extracción forestal, ha pasado por momentos de efervescencia, no obstante, se ha logrado preservar una buena cobertura boscosa por medio de acuerdos internos de manejo del recurso forestal que garantizan su sostenibilidad.

El aprovechamiento maderable y no maderable del bosque

Existen dos categorías de manejo del bosque (o monte) para la comunidad: el *monte bravo o biche* y el *monte jecho*. El *monte bravo* son zonas heterogéneas de bosque denso de baja intervención, se conocen como áreas de bosque comunitario y son de uso colectivo, de utilidad pública e interés social; se asocia con áreas de interés cultural por parte de los médicos tradicionales, quienes promueven la conservación de las plantas por su uso mágico religioso. Basado en lo anterior y en el marco de la autonomía comunitaria, el aprovechamiento forestal comercial debe considerar el derecho de propiedad sobre los recursos naturales (Anexo 5 literal 6), cumplir con los permisos de Ley para este tipo de extracción y estar autorizado por el Consejo Comunitario.

El Consejo Comunitario cuenta con las facultades para el ordenamiento del recurso forestal: proceso que debe ser reconocido en la reglamentación y que, según la ley, deberá hacerse de manera coordinada con la autoridad ambiental como precondition para cualquier tipo de explotación¹⁴.

Debido al interés por la autonomía comunitaria, el bosque comunitario cuenta con áreas identificadas para la conservación. Estas áreas utilizan prácticas específicas de producción de baja intensidad, bajo criterios tradicionales y acuerdos de uso interno e interétnico con las comunidades

¹⁴ La Corte Constitucional señala que las comunidades son las únicas autorizadas o habilitadas para aprovechar el recurso forestal en su territorio sin perjuicio de su derecho a asociarse con terceros; que los beneficios deben quedar en las comunidades y que ningún aprovechamiento comercial puede ser realizado hasta tanto se expida o se cuente con la reglamentación del recurso que garantice un aprovechamiento sostenible y culturalmente adecuado. Sentencia T 955 de 2003.

indígenas. Además, dichas áreas son consideradas como zonas de exclusión de la minería (Anexo 6 literal 2)

Respecto al uso no maderable del bosque, entendemos que éste tiene un enorme potencial para contribuir a la regulación del clima mundial, tema para el cual se han desarrollado sistemas alternos de uso. Como comunidad existe disposición por escuchar propuestas de aprovechamiento de los bosques comunitarios que contribuyan a disminuir los efectos del cambio climático, en el marco del reconocimiento de la participación comunitaria y la distribución equitativa de beneficios.

MEDICINA TRADICIONAL

La medicina tradicional es considerada una práctica rica en conocimientos ancestrales y por tanto forma parte de la cultura de nuestra comunidad. Está asociada con el uso de plantas y sus derivados, y fue la principal estrategia de salud en la región ante la escasez de servicios de salud oportunos. El conocimiento asociado con las bondades medicinales de los recursos naturales, se respeta y se reconoce, convirtiendo, a los médicos tradicionales, en máximas autoridades de la medicina tradicional y, a la comunidad, en responsables de velar por la seguridad de estos conocimientos.



Imagen tomada por Tatiana López

Medico Tradicional Angostura Alto San Juan

Prácticas de la medicina tradicional.

Una práctica que promueve la reproducción y el mantenimiento de la medicina tradicional en plantas no forestales es la *zotea*. Mientras que *colino* (otra práctica utilizada en la zona) que el colino se refiere a una práctica de producción en policultivos a gran escala, la *zotea* se centra en el uso de policultivos a pequeña escala; la cual, desde una visión más conservacionista, puede ser comparable con pequeños bancos de germoplasma *in situ*. Se trata de un mecanismo cultural doméstico que reúne conocimientos sobre el manejo y uso de varias especies de plantas con propiedades medicinales para el cuerpo y el espíritu (Anexo 7).

Las *zoteas* proveen insumos para la medicina tradicional doméstica y otras prácticas culturales de protección relacionadas con el mundo espiritual. El manejo de cultivo, que realizan tanto hombres como mujeres, se asocia con los ciclos lunares; de ahí que existan ritmos culturales y formas de percibir el tiempo que no suelen coincidir con las que realizan los “foráneos”. Las labores de siembra y mantenimiento de la *zotea* son responsabilidad de las mujeres de la casa, mientras que los hombres, por lo general, son los poseedores del conocimiento asociado con la preparación de los *bebedizos*.



Imagen tomada por Johanna von Braun

Todo lo anterior sugiere un amplio conocimiento consuetudinario de las especies y sus usos, por ello la investigación o desarrollo científico por parte de terceros que involucre dicho conocimiento, se debe realizar de manera concertada con las comunidades, considerando las pautas de acceso, compensación y distribución equitativa de beneficios a que sean generados (Anexo 7 literal 1).

DESAFIOS EN EL TERRITORIO.

Por todo lo anterior, y reconociendo el vínculo entre comunidad, cultura y recursos naturales, es necesario regular el acceso a nuestro territorio, de manera que podamos mantener los sistemas de conocimiento tradicionales que nos representan, los elementos de cohesión física y cultural que garantizan nuestra supervivencia (Anexo 5 literal 1), y las expectativas en cuanto a nuestras aspiraciones de desarrollo para el futuro.

Queremos que el desarrollo considere la visión y principios propios y formas de ordenamiento comunitario (Anexo 5 literal 7), incluyendo prácticas

tradicionales de uso y manejo de los recursos naturales del territorio.

El Alto San Juan es una zona sensible al desplazamiento parcial o total de sus moradores principalmente por la violencia generalizada de los últimos años, producto del interés económico en los recursos naturales del territorio. Las prácticas que buscan el crecimiento económico degradan los recursos naturales, la autonomía y la gobernabilidad comunitaria del territorio, y desvirtúan formas organizativas y sistemas de producción tradicionales.

Los desafíos ambientales están relacionados con la alta deficiencia para el control de las presiones económicas sobre los recursos naturales. Por parte de las autoridades competentes del Estado hace falta articulación sustentada en los intereses y roles de la comunidad y de las entidades competentes para ejercer control y monitoreo de los recursos naturales.

Para ratificar nuestros derechos consuetudinarios, es necesario conocer la legislación nacional relacionada con los recursos naturales, la cultura y el territorio, incluyendo la legislación minera, la ley de tierras, la ley forestal, el proyecto de ley de regalías y los desarrollos internacionales, aplicables a nuestros derechos y que contribuyen a resolver los desafíos territoriales aquí expresados.

Minería mecanizada ilícita¹⁵

Esta actividad realizada principalmente por foráneos con maquinaria pesada (retroexcavadoras), presenta gran crecimiento en el territorio, lo que ha generado cambios en nuestras formas de vida tradicional, introduciendo valores externos que generan la pérdida progresiva de las prácticas y conocimientos tradicionales asociados al manejo de los recursos naturales y del equilibrio ambiental.

Puesto que la normatividad exige la licencia ambiental (Anexo 6 literal 3) desde la etapa de explotación en adelante, las autoridades ambientales no pueden desprenderse de su obligación de evaluación, seguimiento y control de las acciones nocivas para los recursos naturales del territorio¹⁶. Se requieren regulaciones de ley efectiva y conjunta por parte de las distintas autoridades con competencias en el seguimiento y control sobre los recursos naturales (el alcalde, CODECHOCO, INGEOMINAS y el Consejo Comunitario), durante todas las etapas de extracción e incluso de la comercialización del oro extraído ilegalmente del territorio.



Imagen tomada por Gino Cocchiaro

Este tipo de extracción, aunque constituye una infracción administrativa y también un delito, no es en la práctica investigada y sancionada, ni tampoco sus impactos son compensados o medidos. La minería es una actividad que para su realización en territorios colectivos, requiere no sólo de consulta (Anexo8 literal 2), sino también del consentimiento libre, previo e informado de las comunidades.

¹⁵ Entendida ilícita como aquella minería que no posee título minero y por lo tanto no está inscrita en el Registro Minero Nacional y se encuentra al margen de las regulaciones de ley (entre ellas, la exigencia de inscripción ante el alcalde, licencia ambiental y autorización de las comunidades).

¹⁶ La Corte Constitucional ha señalado que la evaluación de impacto ambiental es una condición previa de la actividad minera (sin hacer distinciones en sus etapas y fases) y también ha aclarado que la consulta previa debe surtir para la licencia ambiental de explotación y para cualquier decisión susceptible de afectar a las comunidades, como lo es la concesión minera, e incluso como requisito para la etapa de prospección. Sentencia C 339 de 2002.



Imagen tomada por Gino Cocchiaro

Minería mecanizada tipo de explotación altamente impactante.

“Cuando permitimos la entrada de las retro (minería mecanizada ilegal), el oro se acaba en un año. Atrás quedan las tierras inservibles, y la plata que queda debe repartirse entre todos los familiares; al final, el dinero se acaba al igual que la tierra y la herencia de nuestros hijos. Sólo nos queda el problema: las corrientes de agua contaminadas, agujeros en la tierra y lagunas de agua contaminada. Entonces en la tierra que queda no se puede trabajar ni minería, ni agricultura, quedamos sin oportunidades de generar ingresos y obligados a cambiar nuestras formas de trabajo que se limitan a la búsqueda de oro detrás de una maquina, allí no hay trabajo asociativo cada persona debe arreglárselas por su propia cuenta siempre y cuando el dueño de la maquina le permita bajar al hueco y trabajar bajo riesgo junto con la maquina en donde cada persona debe velar por su bienestar sin importar quien este a su lado. Esa vida no se vive con la minería artesanal” (Belarmina mujer minera artesanal).

Extracción Forestal Ilegal

Las áreas de bosque comunitario en el Alto San Juan están amenazadas por la extracción forestal ilegal para satisfacer a una oferta externa. Este tipo de extracción, que desconoce las dinámicas naturales y de manejo de los recursos maderables y no maderables, contribuye con la deforestación y disminuye las poblaciones silvestres, debido a que no considera criterios técnicos y comunitarios de manejo, lo cual afecta los recursos naturales, la autonomía y la gobernabilidad étnico-territorial.

Todo tipo de extracción comercial forestal que se desarrolle o implemente sin conformidad con nuestros principios, sin autorización, ni reglamentación, vulnera los derechos étnicos de administración y control del territorio y nuestras formas de uso de los recursos.

Las formas de extracción en las áreas de bosque comunitario deben ser reguladas por nuestra estructura de gobierno, el Congreso Nacional acogió, tal como lo reconoce la ley 70 en su artículo 6, la comprensión que los bosques y suelos se consideran incluidos en la propiedad colectiva de las comunidades negras, de tal manera que el aprovechamiento forestal persistente debe reglamentarse con las comunidades (Ley 70 artículo 24). Esto puede realizarse de manera directa y exclusiva, o bien, mediante asociación, en condiciones de igualdad, con entidades públicas o privadas. Sin embargo, como condición necesaria para dichos aprovechamientos, está la definición de la reglamentación el recurso de manera coordinada y consultada, entre la autoridad ambiental y la comunidad.

Uso ilegítimo de saberes de la medicina tradicional.

El acceso y apropiación de conocimiento tradicional, por medio de ejercicios de investigación relacionada con la medicina tradicional, vulnera nuestra cultura y genera pérdida del conocimiento, ya que se desconocen los resultados del manejo de la información que se obtiene en las investigaciones y en los aportes que genera nuestro conocimiento para las investigaciones de usos potenciales de flora y fauna. (Anexo 7 literal 1.2)

Otro desafío es el desinterés de los jóvenes por aprender una tradición exigente y el de los médicos tradicionales – consagrados por transmitir los conocimientos asociados a esta práctica–, quienes no encuentran cualidades en las nuevas generaciones. Ello ha generado una crisis en la medicina tradicional en tanto se favorece la aparición de falsos médicos tradicionales que buscan su propio beneficio económico, generando desprestigio de esta ocupación y pérdida de los conocimientos asociados a la medicina tradicional.

La pérdida de bosques generada por actividades productivas ilegales mineras y forestales, junto con el desinterés de los jóvenes por aprender una tradición exigente y el de los médicos tradicionales por enseñar, ha producido una pérdida progresiva de los conocimientos y prácticas asociadas a la medicina tradicional, situación que se agrava con la pérdida de especies de flora y fauna con potencial medicinal.

Incumplimiento de los mecanismos de participación

La falta de participación en los procesos administrativos tendientes a la toma de decisiones sobre propuestas de desarrollo y aprovechamiento de recursos naturales que afectan el territorio, generan conflictos e impactos que pueden ser reducidos si se realizara una detallada socialización de los proyectos y si se elaboraran procesos adecuados de consulta previa¹⁷, de modo que se puedan identificar y evaluar de manera eficiente, integral y participativa, los impactos y las alternativas de control, manejo, mitigación y compensación.

Actualmente existen pocas garantías de participación por parte del gobierno para que se cumpla con: 1) el derecho al consentimiento previo libre e informado para las actividades de extracción de los recursos naturales en el territorio colectivo, y; 2) conocer y ser consultados en los procesos de

¹⁷La consulta es un derecho de las comunidades. La Corte Constitucional colombiana ha estimado que frente a proyectos de explotación de recursos naturales renovables o no renovables en territorios colectivos, el derecho de consulta previa adquiere el carácter de derecho fundamental. C 620 de 2003

formulación de políticas nacionales que posean una significativa incidencia en los territorios y en nuestras formas de vida.

La participación de la comunidad en las distintas fases e instancias de planeación y decisión de proyectos de desarrollo o medidas que afecten a la comunidad (Anexo 8 literal 1), así como de ejecución y seguimiento a las mismas, se debe garantizar. El conocimiento local debe ser involucrado en los procesos de evaluación de los proyectos y en caso de ser aprobados en su ejecución, debe permitir que éstos se adecúen de mejor manera a las necesidades de la comunidad¹⁸

NUESTRAS EXPECTATIVAS PARA EL FUTURO.

Con respecto a las acciones en el territorio queremos que se fundamente en el derecho de propiedad colectiva (Anexo 5 literal 3), en el derecho al control sobre los recursos naturales existentes en el territorio, en los atributos de inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad de las tierras colectivas, y en el derecho al consentimiento libre, previo e informado de la comunidad. (Anexo 5)



Imagen tomada por Gino Cocchiaro

Frente a actividades extractivas de recursos naturales en el territorio, queremos hacer realidad la explotación en condiciones técnicas ambientales, económicas y culturalmente sostenibles y adecuadas, para lo cual solicitamos al Estado que reconozca, proteja y promueva la minería artesanal como un mecanismo de producción cultural y ambientalmente viable.

Queremos que la participación se garantice mediante un proceso adecuado. Por ello las propuestas, acciones, actividades de intervención y medidas legislativas que afecten la integridad del territorio, deben concertarse con la junta directiva del Consejo Mayor. Las condiciones para garantizar la debida participación comunitaria, implica definir el procedimiento, los términos, el ámbito territorial y los lugares de celebración de reuniones que permitan a las comunidades tener criterios de decisión con respecto a la iniciativa propuesta.

¹⁸ Artículo 44 y 49 de la ley 70 de 1993, y artículo 7 numeral 3 y artículo 33 numeral 2 literal a) de la Ley 21 de 1991.

Queremos con respecto a los procesos, proyectos, programas o acciones en el territorio, lo siguiente:

- Que se reconozca este documento como una herramienta base para el conocimiento, entendimiento y negociación con las autoridades nacionales, departamentales y municipales, y con los actores económicos, políticos y sociales, sin perjuicio de las demás herramientas, reglamentos, protocolos y pautas propias de las comunidades que deban ser atendidas y respetadas
- Que se ejerza control eficiente en las acciones que vulneran los derechos étnicos territoriales, ocasionados actualmente por la extracción y manipulación ilegal de los recursos naturales.
- Que el Estado ejerza control y manejo eficiente y culturalmente adecuado de los factores de violencia y conflicto.
- Que se ejerza debidamente nuestro derecho a la consulta previa (Anexo 8) y al consentimiento previo, libre e informado, según la naturaleza de la medida, proyecto o iniciativa de la cual se trate y de su incidencia en nuestra integridad física, cultural y territorial, respetando en todos los casos, a las autoridades representativas y los medios y procedimientos que se definan.
- Que se considere nuestra participación en los beneficios frente a las actividades de investigación y uso de los recursos naturales del territorio y del conocimiento asociado, de acuerdo a las pautas acordadas con el Consejo Comunitario.
- Que los requisitos del derecho de prelación¹⁹ (Anexo 6 literal 1) se ajusten a las condiciones administrativas y de gestión de los consejos comunitarios²⁰, así como al verdadero alcance de los derechos sobre el territorio.
- Que se especifiquen los niveles de competencia y las formas de articulación con los actores institucionales en el territorio entre las comunidades y la autoridad municipal, la autoridad ambiental (regional y nacional) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
- Que las actividades que afectan nuestro territorio se rijan por los valores y normas ancestrales y respeten los instrumentos internos de manejo territorial, tales como: El reglamento interno de administración y manejo del territorio, el reglamento de uso y manejo de los recursos naturales y los protocolos bioculturales comunitarios que contribuyen a la estrategia de gobernabilidad comunitaria.
- Que se garantice en la práctica la participación de nuestras autoridades e instituciones representativas y de personas de la región, en los proyectos a desarrollarse en el territorio, durante todas sus etapas de diseño, evaluación, implementación, seguimiento y monitoreo.

¹⁹ El Código de Minas establece que, las comunidades tienen un derecho de preferencia, frente a las solicitudes de concesión minera de terceros, para explotar los yacimientos y depósitos mineros ubicados en las zonas mineras de comunidades negras.

²⁰ LA corte constitucional señala que “(...) el Estado debe realizar las correspondientes acciones positivas, incluidas las económicas” (como por ejemplo otorgar “créditos de fomento, asistencia técnica, capacitación administrativa y de mercadeo”, etc.), “para hacer realidad la explotación minera por parte de los propios grupos” o comunidades étnicas (C 892 de 2002).

- Que las instituciones del Estado, respeten, protejan y promuevan las prácticas tradicionales, incluyendo las prácticas asociadas al manejo de la minería artesanal, manejo de bosque y medicina tradicional, que contribuyen al manejo sostenible de los recursos y que garantizan la permanencia de las comunidades en el territorio.
- Que la comunidad tenga la posibilidad al veto hacia un proyecto que afecte de manera negativa y significativa el territorio y su gente, tal como se ha señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras instancias internacionales. (Anexo 8 Literal 2)

Consentimiento libre, Previo e informado

Queremos que se garantice el desarrollo social y ambiental del territorio ejerciendo el derecho al consentimiento libre previo e informado para las actividades que afecten el territorio²¹ existen una serie de asuntos en los cuales ya existe un consenso internacional en torno a la exigencia de obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades. Esto significa que la comunidad tiene poder de decisión y de veto con respecto a proyectos relacionados con el desarrollo, la utilización o la explotación de los recursos minerales, forestales o hídricos, que tenga un impacto significativo en el derecho al uso y goce del territorio ancestral.

Sabemos que los resultados de la consulta varían según la gravedad de la afectación de la medida consultada. Sin embargo existen asuntos o casos en los cuales, debido a la gravedad de la afectación para la comunidad, la decisión o posición expresada se torna obligatoria para el Estado²². En todo caso deben arbitrarse los mecanismos necesarios para mitigar, corregir o restaurar los efectos que las medidas de la autoridad produzcan o puedan generar en detrimento de la comunidad o de sus miembros" (T 652 de 1998).

Relación con las autoridades

Como comunidad y conforme con los derechos que nos otorga la Constitución y la ley para nuestro desarrollo y protección de la cultura, nuestras expectativas de relaciones específicas son las siguientes:

• NIVEL MUNICIPAL

ALCALDÍA. Que desde el proceso de planificación municipal se reconozcan, adopten y validen las formas comunitarias de ordenamiento y aspiraciones de desarrollo en los políticas municipales de ordenamiento y desarrollo. Que las autoridades municipales se coordinen y acompañen apropiadamente con las autoridades propias en el control de las actividades ilícitas dentro del territorio.

²¹ El artículo 76 de la Ley 99 de 1993, estipula que: *"La explotación de los recursos naturales deberá hacerse sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas y de las negras tradicionales de acuerdo con la Ley 70 de 1993 y el artículo 330 de la Constitución Nacional, y las decisiones sobre la materia se tomarán, previa consulta a los representantes de tales comunidades"*.

²² La Corte Constitucional ha señalado que: *"(...) la decisión de la autoridad debe estar desprovista de arbitrariedad y de autoritarismo; debe ser objetiva y razonable con la finalidad constitucional que le exige al Estado la protección de la identidad social, cultural y económica de la comunidad"*. T 652 de 1998

AUTORIDAD AMBIENTAL. Que de manera articulada con el Consejo Mayor se estudien las solicitudes de proyectos, obras o actividades en el territorio colectivo, incluidas las actividades de exploración y explotación de los recursos mineros, forestales y de otros recursos naturales en áreas que hacen parte del territorio colectivo del Alto San Juan y se adelanten los debidos seguimientos y controles a las actividades, lícitas e ilícitas

- **NIVEL NACIONAL**

MINISTERIO DE MINAS (INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINAS - INGEOMINAS)²³

- Que consulte con nuestra autoridad, el concejo comunitario Mayor ASOCASAN, los mecanismos para realizar un proceso legítimo de consulta y de obtención del consentimiento informado previo, frente a las solicitudes de concesión minera por parte de terceros, y que se garantice que las comunidades participen en la definición de los proyectos de inversión de regalías por las actividades mineras en el territorio.
- Que las condiciones de prelación en la explotación del recurso minero, se ajusten a las capacidades de los consejos comunitarios y sean diferenciadas de los requerimientos exigentes a las empresas multinacionales.

MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

- El Ministerio debe monitorear el desempeño de la Comisión Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible de Chocó (CODECHOCO) en el cumplimiento de sus funciones legales, en especial las relativas al control y sanción de actividades ilícitas. Además, se debe garantizar el desarrollo de medidas de recuperación de las áreas degradadas por actividades de extracción ilegal de recursos renovables y no renovables.
- Que las estrategias culturales que han contribuido a la conservación del territorio y acuerdos internos comunitarios se reconozcan, protejan y promuevan como medidas efectivas para el manejo de la biodiversidad, y que se incluyan en los lineamientos para el desarrollo de los estudios de impacto ambiental.
- Que de manera conjunta entre la comunidad y ASOCASAN se establezcan áreas excluibles de minería en determinadas zonas que cumplen con una función social y ecológica y se encuentran zonificadas de acuerdo con los usos comunitarios y prácticas culturales.

MINISTERIO DEL INTERIOR

- Que garantice, con el Consejo Comunitario local y mayor, que el proceso de consulta previa se desarrolle debidamente por parte de las autoridades o instancias que correspondan según el tipo de medida en cuestión, con un acompañamiento constante y generando capacidades en nuestros líderes comunitarios para apropiarse de esta herramienta y hacer valer este derecho fundamental para las comunidades étnicas.
- Que acompañe los procesos para garantizar que se cumpla adecuadamente con la consulta a las comunidades que serán afectadas y en presencia de las personas autorizadas para suscribir acuerdos.

²³ El Ministerio de Minas y Energía delegó en INGEOMINAS y en seis Gobernaciones Departamentales (Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cesar y Norte de Santander), varias de sus funciones (Resolución número 180074 de 2004).

- Que las decisiones adoptadas en los espacios de interlocución con la comunidad durante el proceso de consulta serán considerados para la no aprobación o los ajuste a cualquier proyecto que pueda amenazar la supervivencia física o cultural de la comunidad.
- Que de darse la violación al derecho de consulta previa, por consulta inadecuada o por omisión se acompañe el proceso de reparación de los impactos generados.

Compromisos comunitarios

Conscientes que somos titulares de derechos pero también de obligaciones, la comunidad del Alto San Juan nos comprometemos a difundir y aplicar las disposiciones contempladas en este Protocolo y ratificamos:

- ✓ Nuestro compromiso con el desarrollo sostenible mediante las prácticas culturales que promueven la permanencia de los recursos y el conocimiento asociado.
- ✓ El interés en establecer abiertamente niveles de relaciones con actores externos para el desarrollo de actividades al interior del territorio en el marco de la sostenibilidad ambiental y cultural establecido por la comunidad.
- ✓ La intención de construir, de manera conjunta, mecanismos y herramientas para dar cumplimiento y seguimiento a los principios de sostenibilidad acordados entre la comunidad y demás actores que interactúan en el territorio, para que se garantice la gobernabilidad de la comunidad sobre el manejo de los recursos del territorio.

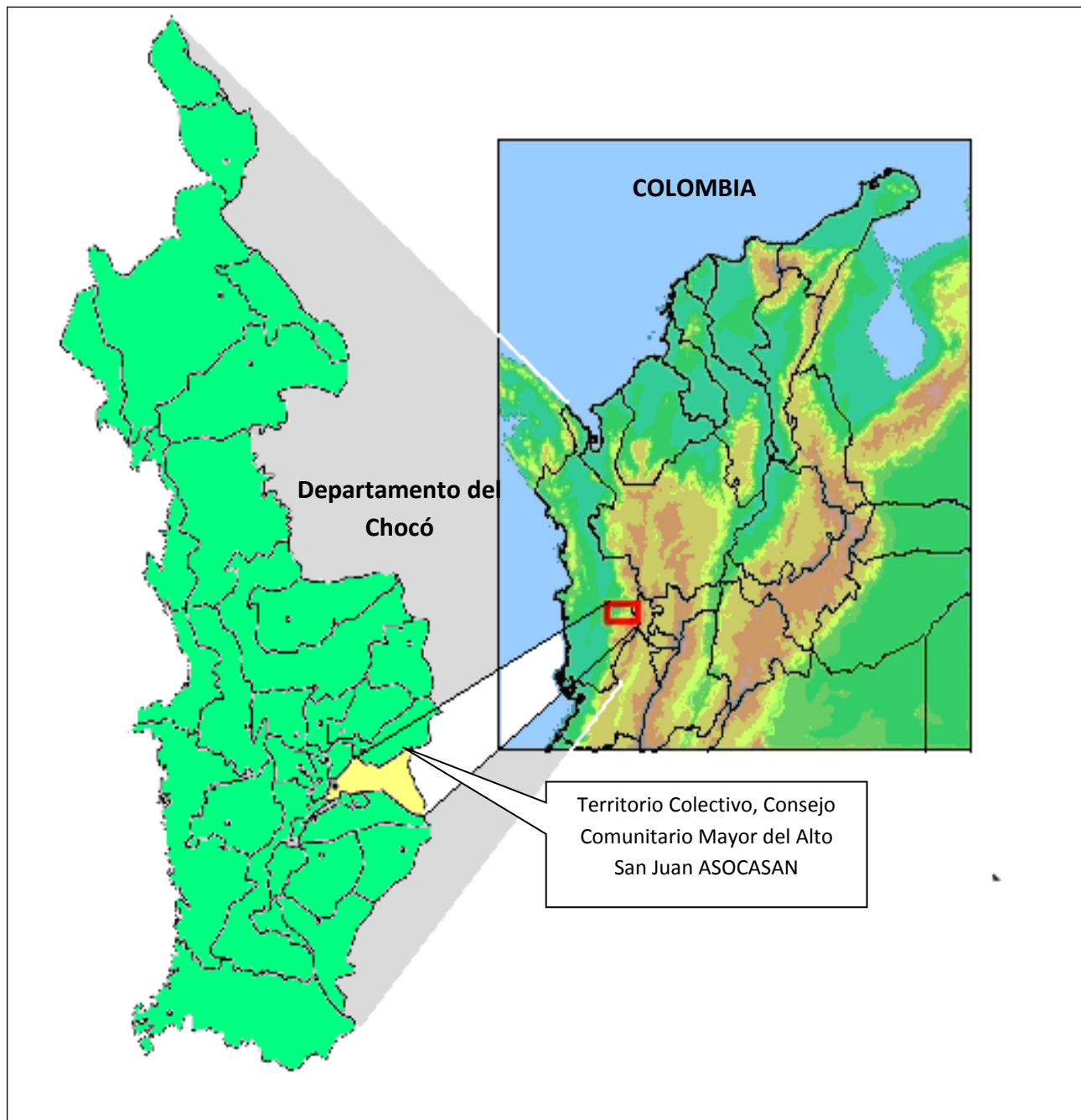


Imagen tomada por Johanna von Braun

- ✓ Nuestro compromiso con el territorio y las futuras generaciones, en el sentido que defenderemos y velaremos el principio no negociable del manejo sostenible de los bosques y el recurso hídrico, frente a cualquier actividad que afecte el territorio.

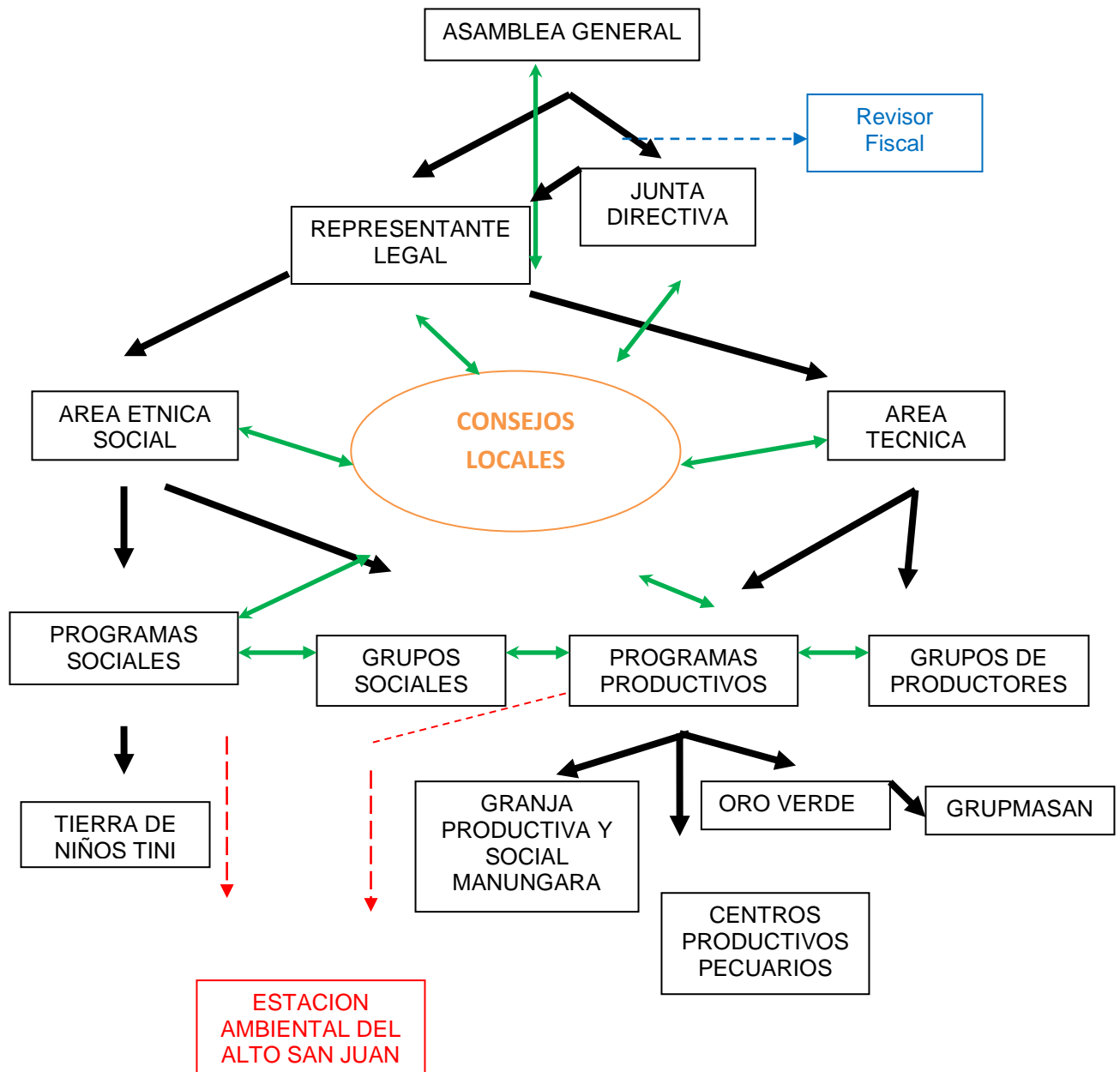
ANEXOS

ANEXO 1. Localización espacial territorio colectivo Alto San Juan.



ANEXO 2. Estructura Interna Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan ASOCASAN.

ORGANIGRAMA.



Jerarquía=



Relación=



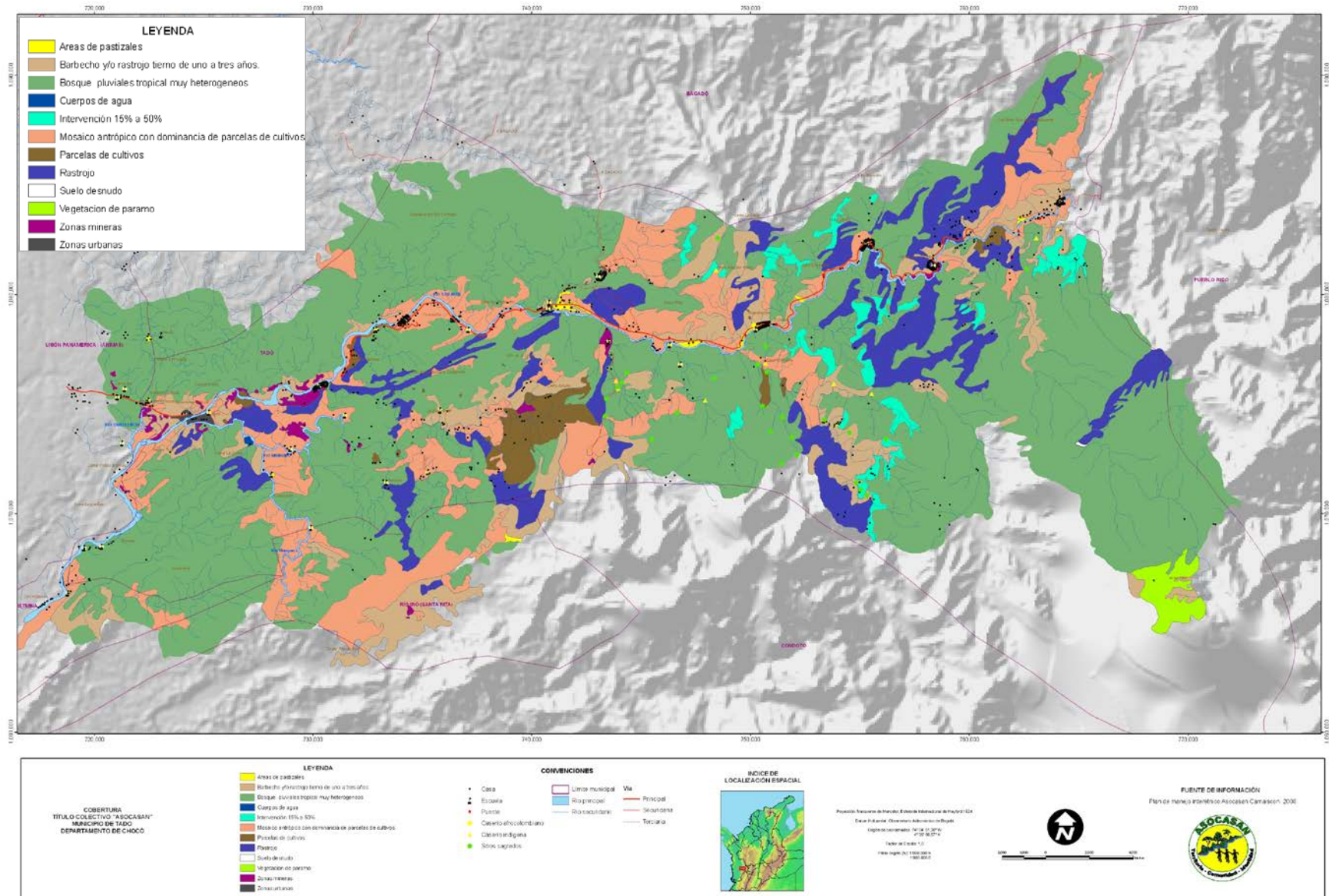
Control fiscal=



Relación Institución=



ANEXO 3. Mapa de coberturas del territorio colectivo de la comunidad del Alto San Juan.



Fuente: Universidad Javeriana. Observatorio de Territorios Etnicos.

ANEXO 4. Criterios comunitarios para manejo de recursos naturales.

CRITERIOS MINERÍA TRADICIONAL (certificación Oro verde)	PRINCIPIOS PARA MANEJO DE BOSQUE
1. No debe haber destrucción masiva ecológica que genere cambios al ecosistema que impidan la posibilidad de restauración del área intervenida.	1. No se debe cortar árboles que estén en el área de reserva comunitaria con fines comerciales.
2. No deben utilizarse químicos tóxicos como mercurio, cianuro y otros contaminantes tóxicos en los procesos de extracción y refinación.	2. Las áreas de reservas no deben de ser objetos de arrendamientos por ningún miembro de la junta del consejo local, ni por habitantes de la comunidad.
3. Las áreas explotadas deben obtener estabilidad ecológica en los siguientes tres años.	3 Las especies que estén consideradas bajo algún grado de amenaza o en vía de extinción serán vetadas para corte aun para usos domésticos.
4. La capa orgánica del suelo removida en el desarrollo de la explotación debe ser restablecida.	4. Las maderas que estén por fuera del área colectiva no serán objeto de uso sin acuerdos previos.
5. El material de grava estéril y los pozos producidos por la explotación minera no pueden exceder la capacidad de rehabilitación local del ecosistema.	5. Deberá entregarse al consejo local el reporte de las especies cortadas y la cantidad, y éste, deberá enviarlo al consejo mayor.
6. La carga de sedimentos aportados a las quebradas, ríos, lagos debe ser controlada en cantidad y frecuencia de tal forma que el ecosistema acuático nativo no se deteriore.	6. Las consideraciones culturales como fechas, horas del día y fases lunares, deberán contemplarse para la tala de árboles.
7. Las actividades mineras realizadas por los explotadores deben tener el consentimiento de los consejos comunitarios.	7. Los leñadores o comerciantes madereros que ingresen a nuestros bosques colectivos sin autorización concertada con el consejo comunitario estarán incurriendo en un delito.
8. La declaración del origen del oro producido debe hacerse a nombre del municipio correspondiente.	8. Las áreas de nacimientos no serán objeto de extracción forestal
9. En áreas boscosas no se intervendrán más del 10% de una hectárea durante un periodo de dos años	9. Afectar las áreas de bosque en la menor medida para garantizar la permanencia de la fauna asociada y especies no forestales con valores culturales para la comunidad.
10. Dar cumplimiento a la normatividad nacional, regional y local.	10. Conservar una cobertura forestal que favorezca la abundancia fauna silvestre.

ANEXO 5. Nuestros derechos territoriales de comunidades negras en Colombia

Existen una serie de derechos que podrían denominarse genéricamente como “derechos territoriales” en cabeza de los pueblos indígenas y tribales del mundo, entre los que figuran las comunidades negras del país, que han sido reconocidos a nivel internacional y nacional, y que tienen fundamento en la relación especial que estas comunidades poseen con la tierra y sus recursos, y en la necesidad de su protección.

1. Relación especial y compleja con el territorio²⁴

La relación única entre los pueblos indígenas y tribales y sus territorios ha sido ampliamente reconocida en el derecho internacional de los derechos humanos y en el derecho nacional en la Ley 70 de 1993 para comunidades negras de Colombia. Así mismo, el artículo 21 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y el artículo XXIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre protegen dicha relación, así como los recursos naturales de los territorios ancestrales, los cuales son de importancia fundamental para el goce de otros derechos humanos de estos pueblos²⁵.

Según han reiterado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana, la preservación de la conexión particular entre las comunidades indígenas y sus tierras y recursos se vincula con la existencia misma de estos pueblos, y por lo tanto “amerita medidas especiales de protección”²⁶.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha insistido en que “los Estados deben respetar la especial relación que los miembros de los pueblos indígenas y tribales tienen con su territorio a modo de garantizar su supervivencia social, cultural y económica”²⁷.

1.2. Tierras vs territorios

En el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los Estados reconocen la importancia de la relación entre tierra y territorio, y se comprometen en asegurar el ejercicio de una serie de derechos que se relacionan con aspectos que trascienden la dimensión física de dicha relación o el solo ámbito de ocupación de las comunidades o de las tierras que les han sido tituladas.

²⁴ En este aparte se recogen las consideraciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consignadas en el documento “*Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales, Normas y Jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos*”, 2010.OEA/SER.L/V/II.Doc 56/09, 30 de diciembre de 2009. Párrafos 55, 56 y 57.

²⁵ “El uso y goce de la tierra y de sus recursos son componentes integrales...de la efectiva realización de sus derechos humanos en términos más generales” CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004, párr. 114.

²⁶ CIDH, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002, párr. 128.

²⁷ Corte Interamericana de Derechos Humanos. *Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam y Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua*.

En el artículo 13 se señala que “al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación”.

El Convenio señala que para la aplicación de varias de sus disposiciones, el ámbito territorial es del de “la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”.

3. Derecho de propiedad y posesión

La CIDH ha sido enfática en explicar que “la recuperación, reconocimiento, demarcación y registro de las tierras significan derechos esenciales para la supervivencia cultural y para mantener la integridad comunitaria”²⁸.

Por su parte, el Convenio 169 de la OIT señala que “deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”.

Para los anteriores efectos “deberá instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados”²⁹.

4. Fundamento del derecho de propiedad

La jurisprudencia interamericana ha caracterizado la propiedad de los pueblos indígenas y tribales como “una forma de propiedad que se fundamenta no en el reconocimiento oficial del Estado, sino en el uso y posesión tradicionales de las tierras y recursos”³⁰.

Los territorios de los pueblos indígenas y tribales “les pertenecen por su uso u ocupación ancestral”³¹.

El derecho de propiedad comunal se fundamenta asimismo en las culturas jurídicas internas, y en los sistemas ancestrales de propiedad, con independencia del reconocimiento estatal³².

²⁸ Comisión Interamericana de Derechos Humanos. *Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Perú*. Doc. OEA/Ser.L/V/II.106, Doc. 59 rev., 2 de junio de 2000, Capítulo X, párr. 16. Tomado del documento OEA/SER.L/V/II.Doc 56/09, 30 de diciembre de 2009.

²⁹ Artículo 13, Convenio 169 de la OIT.

³⁰ Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Documento OEA/SER.L/V/II.Doc 56/09, 30 de diciembre de 2009.

³¹ CIDH, *Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en Bolivia*. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 34, 28 de junio de 2007, párr. 231.

³² Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Documento OEA/SER.L/V/II.Doc 56/09, 30 de diciembre de 2009. Párrafo 68.

“Los derechos territoriales existen aún sin actos estatales que los precisen, o sin un título formal de propiedad”³³. Por ello, la titulación y demarcación son actos del Estado que “no constituyen, sino meramente reconocen y garantizan derechos que pertenecen a los pueblos por razón de su uso consuetudinario”³⁴.

4.1 Alcances del derecho de propiedad

Tal como lo señala la CIDH, “Los derechos de propiedad de los pueblos indígenas y tribales sobre sus territorios son jurídicamente equivalentes a los derechos de propiedad privada no indígena”³⁵, incluso, albergan una trascendencia mayor, por cuanto están asociados a la posibilidad de ejercicio de otros derechos vitales para las comunidades y por ello, en Colombia, al derecho de propiedad de las comunidades sobre sus tierras se le ha reconocido el carácter de derecho fundamental³⁶.

Por ello, “los Estados deben establecer los mecanismos legales necesarios para aclarar y proteger el derecho a la propiedad comunal de los pueblos indígenas y tribales, al igual que se protegen los derechos de propiedad en general bajo el sistema jurídico doméstico”³⁷. Así, “cualquier distinción legal que privilegie los derechos de propiedad de terceros frente a los derechos de propiedad de los pueblos indígenas y tribales es incompatible con los artículos 21 y 2 de la Convención Americana”³⁸.

Los Estados violan los derechos a la igualdad ante la ley, a la igual protección de la ley y a la no discriminación cuando no otorgan a los pueblos indígenas “las protecciones necesarias para ejercer su derecho de propiedad plena y equitativamente con los demás miembros de la población”³⁹.

4.2 Derecho al desarrollo propio

“Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y

³³ CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de *Awas Tingni v. Nicaragua*. Referidos en: Corte IDH. *Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 140(a). Y, Corte IDH. *Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaya Vs. Paraguay*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 128.

³⁴ Corte Interamericana de Derechos Humanos. *Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaya Vs. Paraguay*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párrafo. 128

³⁵ Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Documento OEA/SER.L/V/II.Doc 56/09, 30 de diciembre de 2009. Párrafo 61.

³⁶ Corte Constitucional, entre otros fallos: Sentencia T 188 de 1993.

³⁷ CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004, párrafo. 155.

³⁸ Comisión Interamericana de Derechos Humanos. OEA/SER.L/V/II.Doc 56/09, 30 de diciembre de 2009. Pie de página 164.

³⁹ Comisión Interamericana de Derechos Humanos. OEA/SER.L/V/II.Doc 56/09, 30 de diciembre de 2009. Párrafo 61.

bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural”⁴⁰.

5. Derecho de propiedad sobre los recursos naturales

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos señala que “los derechos de propiedad de los pueblos indígenas y tribales se extienden a los recursos naturales que están presentes en sus territorios, recursos tradicionalmente usados y necesarios para la supervivencia, desarrollo y continuación de la forma de vida de los pueblos”.

“Para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los derechos sobre los recursos son una consecuencia necesaria del derecho a la propiedad territorial”.

Para la Corte Interamericana, el fundamento de este derecho está en que “los integrantes de los pueblos indígenas y tribales tienen el derecho de ser titulares de los recursos naturales que han usado tradicionalmente dentro de su territorio por las mismas razones por las cuales tienen el derecho de ser titulares de la tierra que han usado y ocupado tradicionalmente durante siglos”.

Existen algunos fallos de la Corte Constitucional Colombiana que reconocen expresamente el derecho de propiedad sobre los recursos naturales renovables⁴¹ o por lo menos sobre algunos de ellos, como la flora y los suelos.

El artículo 6 de la Ley 70 de 1993 considera a “los suelos y los bosques incluidos en la titulación colectiva”, pero en el mismo artículo se excluye de las adjudicaciones colectivas a los recursos naturales renovables y no renovables. Esta disposición ambigua fue analizada por la Corte Constitucional, llegando a las siguientes conclusiones:

“El Congreso Nacional acogió, la comprensión de los bosques y suelos en la propiedad colectiva que la Carta Política les reconoce a las comunidades negras, reafirmando la función social y ecológica de dicha propiedad, de acuerdo con las siguientes previsiones:

- a) Los suelos y los bosques se consideran incluidos en la titulación colectiva –artículo 6-.
- b) *“La entidad administradora de los recursos naturales renovables reglamentará concertadamente con las comunidades negras el uso colectivo de áreas del bosque a que se refiere la presente ley, para el aprovechamiento forestal persistente.”*.-artículo 24-.
- c) El aprovechamiento forestal con fines comerciales requiere *“autorización de la entidad competente para el manejo del recurso forestal”*, para lo cual *“la comunidad concesionaria”* podrá entrar en asociación con entidades públicas y privadas –artículos 6 y 24-.

⁴⁰ Artículo 7 del Convenio 169 de la OIT

⁴¹ Vg. Corte Constitucional sentencia T 380 de 1993 y T 955 de 2003

d) El Estado “garantizará y facilitará la capacitación de los integrantes de las comunidades concesionarias en las prácticas y técnicas adecuadas para cada etapa del proceso de producción para asegurar el éxito económico y el desarrollo sustentable de los integrantes de la región”; y dará prioridad a las propuestas, relativas a la explotación de los recursos forestales, de “la gente de las comunidades negras” –artículo 24-.

e)) Los integrantes de las comunidades negras, “titulares del derecho de propiedad colectiva continuarán conservando, manteniendo o propiciando la regeneración de la vegetación protectora de aguas y garantizando mediante un uso adecuado la persistencia de ecosistemas especialmente frágiles, como los manglares y humedales, y protegiendo y conservando las especies de fauna y flora silvestre amenazadas o en peligro de extinción (..)”.-artículo 21-.

“El Gobierno Nacional destinará las partidas necesarias para que la comunidad pueda cumplir con lo dispuesto en el presente artículo”- ídem-.

h) “El uso de los suelos se hará teniendo en cuenta la fragilidad ecológica de la Cuenca del Pacífico. En consecuencia los adjudicatarios desarrollarán prácticas de conservación y manejo compatible con las condiciones ecológicas. Para el efecto se desarrollarán modelos apropiados de producción como la agrosilvicultura, la agroforestería u otros similares, diseñando los mecanismos idóneos para estimularlos y para desestimular las prácticas ambientales insostenibles.” –Artículo 6-.

Al parecer de la Sala las previsiones anteriores regulan en forma puntual el derecho de propiedad colectiva de las comunidades negras, a las tierras que tradicionalmente ocupan, reconocido inicialmente en la Ley 31 de 1967 y refrendado por el Convenio 169 de la OIT y el artículo 55 T. de la Carta, de tal manera que son éstas las únicas propietarias de la flora existente en sus territorios, y quienes pueden extraer y aprovechar los productos de sus bosques.

Por consiguiente las autoridades de la República, en especial las ambientales, están en el deber de: 1) apoyar a las comunidades negras en las acciones que emprendan para impedir el uso de la tierra y la explotación de sus recursos naturales por personas ajenas, y 2) sancionar a quienes se aprovechen de los productos de los suelos y bosques de sus territorios colectivos.

Estos mandatos operan tanto para la tala doméstica como para la que se adelante con fines de comercialización, ya que son las comunidades negras las que pueden aprovechar los recursos forestales de su territorio colectivo, sin perjuicio de su derecho a asociarse en condiciones de igualdad, con entidades públicas o privadas, para adelantar aprovechamientos forestales sostenibles –artículos 18 Ley 21 de 1991-, 211 y SS C R N, y 6°, 19 a 25 Ley 70 de 1993-.

5.1 Administración y control del recurso

El artículo 15 del Convenio 169 de la OIT señala que “los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos”.

Sin embargo la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Constitucional Colombiana va mucho más allá de un derecho de participación en la administración, puesto que hablan de facultades propiamente dichas de administración y control, o por lo menos si bien no exclusivas frente a autoridades estatales, si determinantes para el control sobre los recursos.

Los pueblos indígenas tienen derecho al reconocimiento jurídico de sus formas y modalidades diversas y específicas de control, propiedad, uso y goce de sus territorios “dadas por la cultura, usos, costumbres y creencias de cada pueblo”⁴².

“La Corte Interamericana también ha reiterado que el derecho de los pueblos indígenas a administrar, distribuir y controlar efectivamente su territorio ancestral, de conformidad con su derecho consuetudinario y sistemas de propiedad comunal, lo cual forma parte del derecho a la propiedad amparado en el artículo 21 de la Convención Americana”⁴³

6. Cuando el Estado se reserva el derecho de propiedad sobre ciertos recursos naturales

El Convenio 169 de la OIT señala en su artículo 15 que “En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras...” las comunidades mantienen los siguientes derechos:

- Derecho a la consulta:

“...los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras”.

- Derecho a participar en los beneficios:

“Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades”

- Derecho de indemnización

⁴² Documento Comisión Interamericana de Derechos Humanos. OEA/SER.L/V/II.Doc 56/09, 30 de diciembre de 2009, párrafo 72

⁴³ CIDH, Caso saramaka vs Surinam y CIDH, DOC OEA párrafo 76.

Las comunidades (...) tienen el derecho a “percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, coincide con lo anterior, y atendiendo la doctrina de la Corte Interamericana, incluso va más allá (incorporando el derecho al consentimiento informado previo) y señala que⁴⁴:

“En varios países de la región, existen disposiciones constitucionales o legales que asignan la propiedad de los recursos naturales del subsuelo y de los recursos hídricos al Estado. El sistema interamericano de derechos humanos no excluye este tipo de medidas; es en principio legítimo que los Estados se reserven formalmente la propiedad de los recursos del subsuelo y del agua. Esto no implica, sin embargo, que los pueblos indígenas o tribales no tengan derechos que tienen que ser respetados en relación con el proceso de exploración y extracción mineral, ni tampoco implica que las autoridades estatales tengan plena libertad para disponer de dichos recursos a su discreción. Por el contrario, la jurisprudencia interamericana ha identificado derechos de los pueblos indígenas y tribales que los Estados deben respetar y proteger cuando pretendan extraer los recursos del subsuelo o explotar los recursos hídricos; tales derechos incluyen el **derecho a un medio ambiente seguro y sano, el derecho a la consulta previa y, en ciertos casos, al consentimiento informado, el derecho a la participación en los beneficios** del proyecto, y el **derecho de acceso a la justicia y a la reparación**”.

7. Respeto por distribución interna y modalidades de transmisión

Las comunidades gozan del derecho a:

- Respeto a su ordenamiento y sistemas de distribución y transmisión interna de la tierra

El Convenio 169 de la OIT en su artículo 17 señala que “Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra entre los miembros de los pueblos interesados establecidas por dichos pueblos”.

- Derecho de consulta para transmisión de derechos

“Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su comunidad”. Aunque en Colombia la enajenación de tierras no es posible pues éstas fueron catalogadas como inalienables, inembargables e imprescriptibles según el artículo 63 de la Constitución Política de Colombia, esta disposición resulta relevante en todo caso como criterio de interpretación y pauta para efectos de la transmisión (o modalidades similares como la cesión, o asociación con terceros) de otro tipo de derechos territoriales, como el derecho de uso de los recursos naturales.

8. Otras garantías

⁴⁴ Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Documento OEA/SER.L/V/II.Doc 56/09, 30 de diciembre de 2009. Párrafo 180.

Según el artículo 17 numeral 3 del Convenio 169 de la OIT “Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos”.

8.1 Sanciones por intrusión o uso no autorizado

Los Estados se comprometen en el Convenio 169 de la OIT (artículo 18) a que “La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos”, y a “tomar medidas para impedir tales infracciones”.

ANEXO 6 Minería en tierras de comunidades negras: Aspectos y figuras relevantes de la normatividad y la doctrina.

1. El derecho de prelación

El **derecho de prelación**, debe fundamentarse en el derecho de propiedad colectiva, el derecho al control sobre los recursos naturales existentes en el territorio, los atributos de inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad de las tierras colectivas, y el derecho al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades frente a actividades extractivas de recursos naturales en sus territorios

2. Las zonas de exclusión de la minería

El Código de Minas establece en su artículo 34 que en el país existen unas áreas *excluíbles de la minería*, es decir, que en ellas no se puede desarrollar la minería: áreas que integran el sistema de parques nacionales naturales, parques naturales de carácter regional, zonas de reserva forestal protectora y demás zonas de reserva forestal, ecosistemas de páramo y los humedales designados dentro de la lista de importancia internacional de la Convención Ramsar.

Sin embargo, la Corte Constitucional explicó que las *áreas excluíbles de la minería* no son solo las anteriores, pues existen otras áreas o zonas que gozan de protección constitucional, y que pueden quedar excluidas de la minería, aunque no estén reguladas o declaradas formalmente bajo alguna figura especial.

Las comunidades negras tienen la opción de definir “reservas naturales especiales” en sus territorios, las cuales pueden reglamentarse como total o parcialmente excluidas de la minería (artículo 25 de la Ley 70 de 1993). También son competentes para señalar dentro de las zonas mineras, “los lugares que no pueden ser objeto de exploraciones o explotaciones mineras, por tener especial significado cultural, social y económico para la comunidad, de acuerdo con sus creencias, usos y costumbres” (sentencia C 891 de 2002).

3. Exigencia de licencia ambiental

La explotación minera requiere para su realización de licencia ambiental expedida previamente por la autoridad ambiental (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o la Corporación Autónoma Regional, según la magnitud del proyecto⁴⁵), salvo los “usos por ministerio de la ley”, es decir, aquellos dirigidos a satisfacer las necesidades elementales familiares y la minería que se desarrolla a través del barequeo como práctica tradicional.

La Corte Constitucional ha señalado que la evaluación de impacto ambiental es una condición previa de la actividad minera (sin hacer distinciones en sus etapas y fases), y también ha aclarado que la

⁴⁵ Más información sobre los parámetros utilizados para regular las licencias ambientales se encuentra en los artículos 8 y 9 del Decreto 2820 del 5 de agosto de 2010 “*Por el cual se reglamenta el Título VIII de la ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales*”.

consulta previa debe surtir para la licencia ambiental de explotación y para cualquier decisión susceptible de afectar a las comunidades, como lo es la concesión minera, e incluso como requisito para la etapa de prospección.

Recuadro de normas y doctrina relevante

Constitución Política de Colombia.

El Código de Minas (Ley 652 de 2001)

Pronunciamientos de la Corte Constitucional, entre otros: sentencia C 892 de 2002

ANEXO 7. Derechos asociados a la valoración, protección y control sobre los conocimientos tradicionales

Los conocimientos tradicionales, en un sentido amplio incluyen el patrimonio intelectual y el patrimonio cultural inmaterial, las prácticas y los sistemas de conocimientos de las comunidades tradicionales⁴⁶.

En este sentido general, los conocimientos tradicionales se refieren no sólo al contenido de los conocimientos propiamente dichos, sino también a las expresiones culturales tradicionales, expresiones del folclor, así como a los signos y símbolos asociados a todo lo anterior⁴⁷.

Todo este conjunto de elementos gozan hoy en día de valoración, reconocimiento y protección en instrumentos jurídicos internacionales y en la Constitución Política de Colombia; no sólo desde la perspectiva de la protección del contenido del conocimiento⁴⁸, sino también de las condiciones que permiten su creación, reproducción y mantenimiento⁴⁹, y desde el enfoque de los derechos de las comunidades frente a dichos conocimientos⁵⁰.

A continuación se hace una breve mención a algunos de dichos instrumentos internacionales:

1. El Convenio de Diversidad Biológica (CDB)⁵¹

A través de los tres objetivos fundamentales de este convenio, se reconoce la estrecha y tradicional dependencia de muchas comunidades locales con los recursos, estos objetivos son: la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos.

El artículo 8j, señala que cada Estado parte del convenio: “Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y

⁴⁶ Documento de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual): WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9 del 5 de noviembre de 2010. “Lista breve y descripción técnica de las formas que pueden presentar los conocimientos tradicionales”.

⁴⁷ Documento de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual): WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9 del 5 de noviembre de 2010. “Lista breve y descripción técnica de las formas que pueden presentar los conocimientos tradicionales”.

⁴⁸ v.g. Medidas dirigidas a su recuperación, registro y documentación.

⁴⁹ v.g. Derecho de las comunidades al territorio, al acceso y control sobre los recursos naturales, etc.

⁵⁰ v.g. Derecho de propiedad, de decisión en torno al acceso y uso del conocimiento, etc.

⁵¹ Aprobado en Colombia por la Ley 165 de 1994.

prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente”.

Se destacan entonces las siguientes pautas y principios: 1) la necesidad de protección de los conocimientos, 2) la promoción de su aplicación más amplia, con aprobación de sus titulares, y 3) la distribución justa y equitativa de los beneficios con aquéllos.

Bajo el marco y promoción de este convenio, se fueron consolidando progresivamente tanto a nivel internacional como en las legislaciones nacionales los requisitos del *consentimiento fundamentado previo* y de celebración de *términos mutuamente acordados* con los titulares de los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos y biológicos, como condición para el acceso y uso de dichos conocimientos. Estos requisitos quedaron consignados de manera mucho más explícita y contundente en el Protocolo de Nagoya del CDB (2010).

1.2 El Protocolo de Nagoya Sobre el Acceso y Participación de los Beneficios⁵²

El Protocolo dicta una serie de reglas y medidas dirigidas a asegurar la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del acceso y utilización de los recursos genéticos y de los conocimientos tradicionales asociados a los mismos.

Reconociendo la contribución del conocimiento tradicional a la utilización sostenible y la conservación de la diversidad biológica dentro de los territorios colectivos lo cual se reconoce específicamente en:

Artículo 5 (5) donde se requiere a los gobiernos a "tomar medidas, según proceda, con el objetivo de garantizar que los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos que está en manos de las comunidades indígenas y locales que se accede con el consentimiento previo y consentimiento informado o la aprobación y la participación de estas comunidades indígenas y locales, y que las condiciones mutuamente acordadas se han establecido. "

Artículo 12 (1) en donde se establece que los gobiernos "de conformidad con la legislación nacional, tomen en cuenta las leyes consuetudinarias, protocolos y procedimientos comunitarios, según proceda, con respecto a los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos. "

Artículo 12 (3) (a) exige a los gobiernos a apoyar el desarrollo de "protocolos de la comunidad en relación con el acceso a los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos. "

⁵² Adoptado en la COP 10 (conferencia de las partes) del Convenio de Diversidad Biológica celebrada en Nagoya Japón en Octubre de 2010. Colombia firmó el Protocolo en la sede de Naciones Unidas en Nueva York en febrero de 2011, sin embargo, para su debida incorporación en el ordenamiento jurídico interno, se requiere de consulta previa, de la aprobación por el Congreso de la República y de su posterior revisión de exequibilidad ante la Corte Constitucional, canje de notas y ratificación.

El artículo 7 obliga a las partes a "... adoptar medidas con miras a asegurar que se acceda a los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos.... de conformidad con el consentimiento fundamentado previo o aprobación y la participación de las comunidades indígenas y locales, y que se hayan establecido condiciones mutuamente acordadas"

También se contemplan disposiciones para reforzar y monitorear el cumplimiento de las normas sobre acceso y de las condiciones mutuamente acordadas, medidas de vigilancia y seguimiento, de fortalecimiento de la capacidad de los países y de las comunidades para negociar el acceso y la distribución de beneficios, de aspectos financieros, etc.

2. La Convención de la UNESCO para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003⁵³

Esta Convención tiene por finalidad: a) la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial; b) el respeto del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, grupos e individuos de que se trate; c) la sensibilización en el plano local, nacional e internacional a la importancia del patrimonio cultural inmaterial y de su reconocimiento recíproco; y d) la cooperación y asistencia internacionales⁵⁴.

Para efectos de la Convención, se entiende por "patrimonio cultural inmaterial" los "usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural".

Y, se entiende por "salvaguardia" las "medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, comprendidas la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión -básicamente a través de la enseñanza formal y no formal- y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos".

3. Ley 70 de 1993

En desarrollo del artículo transitorio 55 de la Constitución, se expidió la Ley 70 de 1993 la cual "tiene por objeto reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, (...) así mismo tiene como propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana"⁵⁵.

⁵³ Aprobada en Colombia mediante la Ley 1037 de 2006. Encontrada exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C 120 del 13 de febrero de 2008. Depósito del instrumento de ratificación el 19 de marzo de 2008. Entró en vigor en Colombia el 19 de junio de 2008.

⁵⁴ Artículo 1 de la Convención.

⁵⁵ Artículo 1. Ley 70 de 1993

En sus disposiciones se encuentran distintos tipos de mandatos que reconocen y protegen la diferencia y las particularidades culturales de las comunidades negras y, en este sentido, su conocimiento tradicional y expresiones culturales. Ejemplo de lo anterior es el reconocimiento y protección de sus “prácticas tradicionales de producción” entendidas como “las actividades y técnicas agrícolas, mineras, de extracción forestal, pecuarias, de caza, pesca y recolección de productos naturales en general, que han utilizado consuetudinariamente las comunidades negras para garantizar la conservación de la vida y el desarrollo autosostenible”⁵⁶.

También se destaca el derecho de las comunidades a ser reconocidas como “obtentoras”⁵⁷ cuando a ello haya lugar, y a participar en los beneficios que se deriven directa o indirectamente de su conocimiento y procesos creativos, adaptativos y de domesticación con el medio y los recursos⁵⁸.

⁵⁶ Artículo 2. Ley 70 de 1993

⁵⁷ Que obtiene o ha obtenido algo

⁵⁸ ARTÍCULO 54. “El Gobierno Nacional diseñará mecanismos adecuados para las comunidades negras o integrantes de ellas que hayan desarrollado variedades vegetales o conocimientos con respecto al uso medicinal, alimenticio, artesanal o industrial de animales o plantas de su medio natural, sean reconocidos como obtentores, en el primer caso, y obtengan, en el segundo, beneficios económicos, en cuanto otras personas naturales o jurídicas desarrollen productos para el mercado nacional o internacional.”

ANEXO 8. Derecho de consulta previa y al consentimiento libre, previo e informado

1. La consulta

Las comunidades negras tienen el derecho a que se las consulte previamente cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas (v.g., políticas, planes, normas, autorizaciones, permisos, licencias o concesiones) susceptibles de afectarlas directamente, sin importar que dichas medidas sean positivas o negativas para las comunidades.

2. La consulta como derecho

La consulta es un derecho de las comunidades. La Corte Constitucional Colombiana ha estimado que frente a proyectos de explotación de recursos naturales renovables o no renovables en territorios colectivos, el derecho de consulta previa adquiere el carácter de derecho fundamental, y puede ser exigido judicialmente vía la acción de tutela.

2.1 Requisitos que deben cumplirse

El Estado debe velar y asegurar que se cumplan las siguientes condiciones en los procesos de consulta:

1. La consulta debe ser previa a la expedición de la medida o toma de la decisión, y a la intervención en el territorio.
2. Debe desarrollarse de buena fe y mediante procedimientos apropiados.
3. Debe realizarse de la forma que permita que la comunidad tenga un conocimiento y entendimiento pleno sobre los proyectos, y sobre los mecanismos, procedimientos y actividades que se requieren para ponerlos en ejecución.
4. La comunidad debe ser ilustrada y enterada sobre la manera como la ejecución de los referidos proyectos puede conllevar una afectación o menoscabo a los elementos que constituyen la base de su cohesión social, cultural, económica y política.
5. La comunidad debe contar con la oportunidad para que, libremente pueda, mediante la convocatoria de sus integrantes o representantes, valorar conscientemente las ventajas y desventajas del proyecto, ser oída en relación con sus inquietudes, pretensiones y en la defensa de sus intereses, y pronunciarse sobre la viabilidad del mismo.
6. La comunidad debe participar en la elaboración de los estudios de impacto de los proyectos, los cuales deben ser: previos, integrales o multidimensionales, contemplar la posible afectación de los derechos de las comunidades, ser elaborados por entidades técnicamente capaces y bajo supervisión y aprobación del Estado.
7. El procedimiento, los términos, el ámbito territorial y los lugares de celebración de las reuniones de la consulta deben definirse con las comunidades, es decir, debe ser objeto también de consulta para determinar los medios adecuados de consulta.
8. El proceso de consulta debe ser “culturalmente adecuado”, es decir, se debe respetar los usos, costumbres, tradiciones y derecho propio de las comunidades, lo cual implica, entre otras cosas, tener en cuenta los métodos tradicionales para la toma de decisiones y los tiempos que las comunidades requieran. También implica tener en cuenta sus instrumentos regulatorios internos y herramientas como el presente Protocolo.
9. Las comunidades son las únicas legítimamente habilitadas para definir cuáles son sus autoridades representativas para efectos de la consulta y la toma de decisiones.

2.2 El procedimiento de la consulta

El procedimiento de la consulta cambia según la medida específica a consultar. El gobierno nacional, mediante el Decreto 1320 de 1998 reglamentó la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio, sin embargo, la Corte Constitucional e instancias internacionales, como la OIT, han considerado que es inconstitucional y contrario al Convenio 169 de la OIT, no sólo porque no fue previamente consultado, sino también porque sus contenidos desconocen varias de las condiciones y garantías que fueron arriba enunciadas.

Por este motivo, la Corte Constitucional ha ordenado al gobierno nacional abstenerse de aplicar este Decreto, y el Consejo de Administración de la OIT lo ha requerido, para que lo modifique y armonice con el Convenio 169, en consulta con los representantes de las comunidades.

Como se dijo arriba, el procedimiento a seguir, debe ser entonces aquel que se defina con los legítimos representantes de las comunidades, atendiendo los parámetros señalados por el Convenio 169 de la OIT (Ley 21 de 1991) y por la Corte Constitucional. A este proceso de definición del procedimiento se lo ha llamado “pre consulta”, como una fase anterior a la “consulta definitiva”.

2.3 Los resultados de la consulta

Los resultados de la consulta (es decir, sus efectos: si el parecer o la decisión de las comunidades es o no obligatoria para el Estado) varían según la gravedad de la afectación de la medida consultada.

En términos generales, la consulta se debe realizar buscando llegar a un consenso o acuerdo con las comunidades. Si este acuerdo no se logra, la Corte Constitucional ha señalado que: "la decisión de la autoridad debe estar desprovista de arbitrariedad y de autoritarismo; en consecuencia debe ser objetiva, razonable y proporcionada a la finalidad constitucional que le exige al Estado la protección de la identidad social, cultural y económica de la comunidad... En todo caso deben arbitrarse los mecanismos necesarios para mitigar, corregir o restaurar los efectos que las medidas de la autoridad produzcan o puedan generar en detrimento de la comunidad o de sus miembros" (T 652 de 1998, entre otros). La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha añadido, que en estos casos, las comunidades tienen un derecho a la reparación.

Sin embargo, existen asuntos o casos en los cuales, debido a la gravedad de la afectación para las comunidades, la decisión o posición de éstas se torna obligatoria para el Estado.

Por ello, en las últimas décadas, se ha consolidado, contemplado y exigido en el marco del derecho internacional y también nacional, el requisito del consentimiento libre, previo e informado de las comunidades para las medidas legislativas o administrativas y proyectos que poseen un especial impacto para ellas y su territorio, o para el goce de sus derechos fundamentales, o porque involucran asuntos del ámbito de su disposición autónoma (como por ejemplo, el acceso y uso de su conocimiento tradicional).

3. El consentimiento libre, previo e informado

Como se dijo, existen una serie de asuntos en los cuales ya existe un consenso internacional en torno a la exigencia de obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades. En este tipo de asuntos, las comunidades tienen un poder de decisión y de veto frente a las medidas o proyectos en cuestión. Dichos asuntos son:

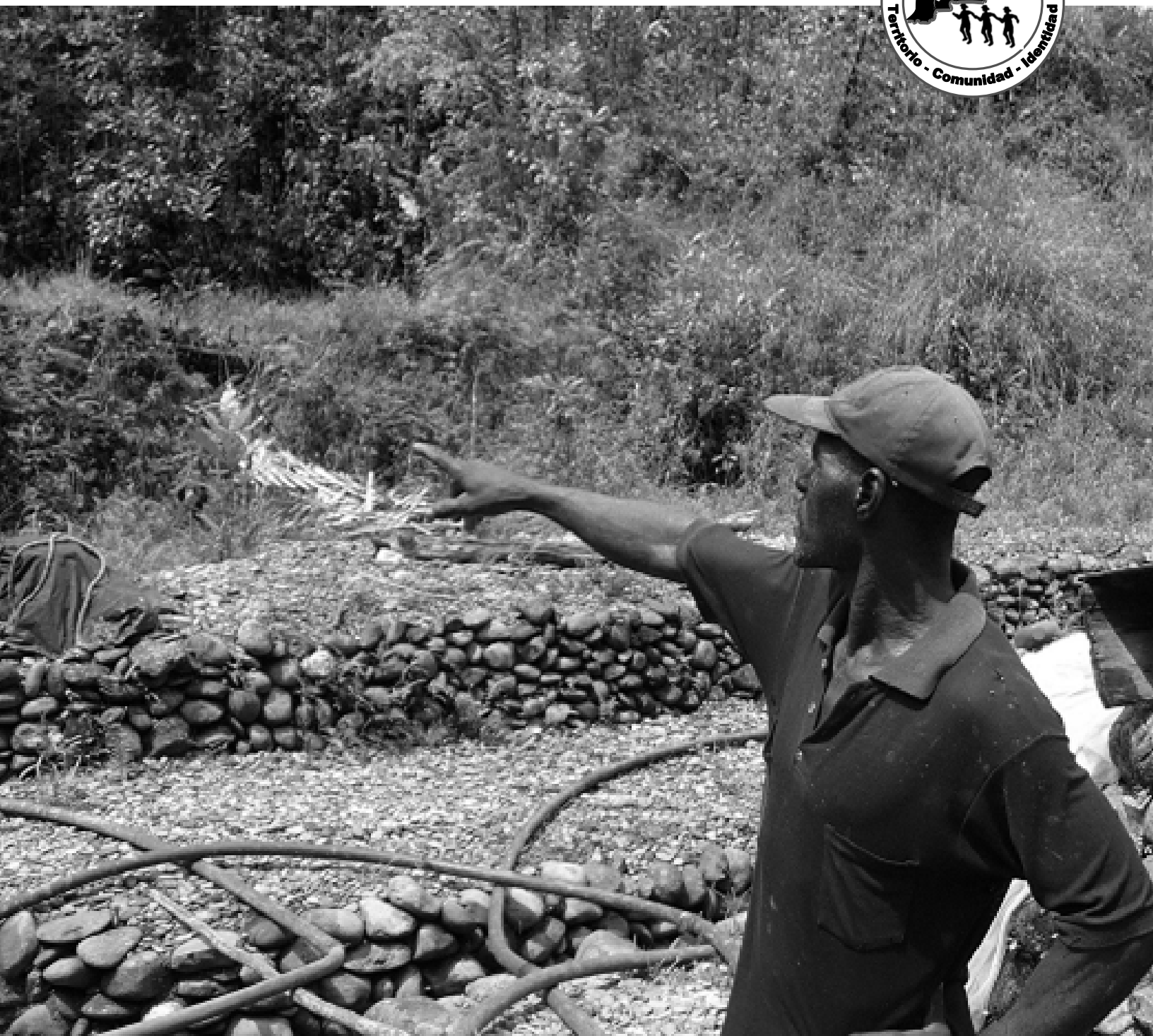
1. Todo plan de desarrollo, inversión, exploración o extracción que tenga un impacto significativo en el derecho al uso y goce de sus territorios ancestrales y sus recursos, en particular, proyectos relacionados con el desarrollo, la utilización o la explotación de los recursos minerales, forestales o hídricos.
2. Cuando los proyectos hayan de emprenderse o puedan repercutir en lugares sagrados o de especial significancia biológica o cultural para las comunidades.
3. Para planes o proyectos de desarrollo o inversión que impliquen el desplazamiento de las comunidades de sus territorios tradicionales, es decir, su reubicación permanente.
4. Para el depósito o almacenamiento de materiales peligrosos en tierras o territorios de las comunidades, según lo dispone el artículo 29 de la Declaración de la Declaración de Naciones Unidas, lo cual puede presentarse en proyectos extractivos del oro u otros minerales.
5. Para el acceso y uso del conocimiento tradicional de las comunidades.

Adicionalmente a estos asuntos generales, el Estado está en la obligación de verificar en cada caso concreto si el tipo y gravedad de la afectación implican la necesidad de asumir como obligatoria y vinculante la decisión de las comunidades.

Recuadro normativo y de doctrina relevante

Lo señalado anteriormente ha sido dispuesto o tiene fundamento en las siguientes normas, sentencias y parámetros internacionales y nacionales, entre otras:

- Convenio 169 de la OIT aprobado en Colombia mediante la ley 21 de 1991.
- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
- Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
- Convenio Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial de 1969.
- Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, 2007.
- Convenio de Diversidad Biológica.
- Protocolo de Nagoya – CDB.
- Directrices AKWÉ: KON, directrices voluntarias en el marco del CDB.
- Decisión Andina 391 de 1996.
- Constitución Política de Colombia.
- Pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre ellos: caso Pueblo Saramaka vs Surinam y Caso Sawhoyamaya vs Paraguay.
- Comisión de Expertos del Consejo de Administración de la OIT. GB282/14/4.61.
- Recomendaciones y observaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.
- Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore de la OMPI.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos, documento OEA/Ser. L/V/II. Doc 56/2009, entre otros relevantes.
- Pronunciamientos de la Corte Constitucional, entre ellos: T 380 de 1993, T 349 de 1996, SU 039 de 1997, T 523 de 1997, T 652 de 1998, T 737 de 2005, C 410 de 2002, C 418 de 2002, C 891 de 2002, T 955 de 2003, SU 383 de 2003, C 208 de 2007, C 030 de 2008, C 461 de 2008, C 175 de 2009, T 769 de 2009.



Instituto de Investigaciones
Ambientales del Pacífico



NATURAL JUSTICE